RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MANIZALES

Manizales, 30 de septiembre de dos mil veinticuatro (2024).

Sentencia Nro.: 118/2024
Medio de Control: Reparación Directa
Actores: PAULA YULIANA QUINTERO OSORIO Y OTROS
Accionado: DEPARTAMENTO DE CALDAS
Radicados: 17-001-33-33-002-2019-00077-00
Instancia: Primera

En los términos del inciso final del artículo 181 del C.P.A.C.A., procede el despacho a decidir sobre las pretensiones formuladas en los procesos de la referencia, para lo cual se tendrá en cuenta lo precisado en la audiencia inicial respecto a las excepciones y la fijación del litigio.

ANTECEDENTES:

1.- LA DEMANDA

Por intermedio de apoderada judicial, la parte actora, en ejercicio del medio de control de Reparación Directa, demandaron al DEPARTAMENTO DE CALDAS, solicitando lo que se cita a continuación en el acápite de pretensiones:

Que se declare al DEPARTAMENTO DE CALDAS, administrativamente responsable de la muerte de los señores RUBIEL DE JESÚS CANDAMIL CANDAMIL, LUZ DARY FRANCO ORREGO y MONICA VIVIANA GALLEGO GALLEGO; así mismo por las lesiones sufridas por PAULA YULIANA QUINTERO OSORIO y el daño del vehículo de propiedad del señor MARINO LONDOÑO, identificado con las placas TAJ-917.

Y como consecuencia de la anterior declaración, que se impongan las siguientes o similares condenas:

PRIMER GRUPO FAMILIAR:

Perjuicios morales: Se reconozca a los señores MARÍA RUBIA CANDAMIL DE CANDAMIL (madre) 100 smlmv; FERNANDO DE JESÚS CANDAMIL CANDAMIL (hermano) 50 smlmv y SILVIO DE JESÚS CANDAMIL CANDAMIL (hermano) 50 smlmv.

Perjuicios materiales: Se reconozca por la pérdida de ayuda económica a la señora MARÍA RUBIA CANDAMIL DE CANDAMIL, la indemnización por lucro cesante (vencido o consolidad y futuro).

SEGUNDO GRUPO FAMILIAR:

Perjuicios morales: Se reconozca a los señores PAULA YULIANA QUINTERO OSORIO (víctima directa) 100 smlmv; EMMANUEL QUINTERO OSORIO (hijo) 100 smlmv; GUILLERMP QUINTERO SALAZAR (padre) 100 smlmv; GLORIA ELSY OSORIO JARAMILLO (madre) 100 smlmv; MARCO ANTONIO QUINTERO OSORIO (hermano) 50 smlmv; JUAN DAVID QUINTERO OSORIO (hermano) 50 smlmv.

Daño a la salud: Se reconozca a la señora PAULA YULIANA QUINTERO OSORIO la suma de 200 smlmv.

TERCER GRUPO FAMILIAR:

Perjuicios morales: Se reconozca a los señores NICANOR FRANCO FRANCO (abuelo) 100 smlmv; ESTRELLA ORREGO DE FRANCO (abuela) 100 smlmv; RUBEN DARIO FRANCO ORREGO (tío) 50 smlmv y AMPARO FRANCO ORREGO (tía) 50 smlmv.

CUARTO GRUPO FAMILAR:

Perjuicios morales: Se reconozca a los señores JESÚS MARÍA GALLEGO LOAIZA (padre) 100 smlmv; GILMA GALLEGO LOAIZA (madre) 100 smlmv; VERÓNICA GALLEGO GALLEGO (hermana) 50 smlmv; JUAN CAMILO GALLEGO GALLEGO (hermano) 50 smlmv; CLAUDIA PATRICIA GALLEGO GALLEGO (hermana) 50 smlmv; YAMID GALLEGO GALLEGO (hermano) 50 smlmv; EGIDIO GALLEGO GALLEGO (hermano) 50 smlmv; CARLOS ALBERTO GALLEGO GALLEGO (hermano) 50 smlmv; NATALIA ANDREA GALLEGO GALLEGO (hermana) 50 smlmv; DEISY LILIANA GALLEGO GALLEGO (hermana) 50 smlmv; GLADYS GALLEGO GALLEGO (hermana) 50 smlmv; NORBEY GALLEGO GALLEGO (hermano) 50 smlmv; ALBANY GALLEGO GALLEGO (hermana) 50 smlmv; SANDRA YANETH GALLEGO GALLEGO (hermana) 50 smlmv; OTILIA LOAIZA ÁLVAREZ (hermana) 50 smlmv y JUAN JOSÉ GALLEGO GIRALDO (hermano) 50 smlmv.

Daños a la sucesión por perjuicios morales y a la salud: Se reconozca y pague a los señores JESÚS MARÍA GALLEGO LOAIZA y GILMA GALLEGO LOAIZA, los daños y perjuicios morales y a la salud en cuantía de 100 smlmv, por cada concepto, de los cuales fue titular la señora MONICA VIVIANA GALLEGO GALLEGO, al haber sobrevivido al accidente de tránsito y fallecer el 05 de abril de 2017, luego de 14 días de sufrir las lesiones.

QUINTO GRUPO:

Perjuicios materiales: Se reconozca y pague al señor MARINO LONDOÑO los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente y lucro cesante, por la

perdida total del vehículo tipo bus de servicio público, marca Ford, modelo 1960 e identificado con la placa TAJ-917.

Adicionalmente, para cada grupo familiar se reclama de manera común lo siguiente:

Intereses: Se cancelen los intereses que se llegan a consolidar desde la ejecutoria del fallo hasta el pago de las sumas reconocidas.

Costas: Se condene a la entidad demandada al pago de las costas procesales.

Cumplimiento de la sentencia: Se ordene a la demandada el cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA.

En los hechos de la demanda se señala lo siguiente:

El día 21 de marzo de 2017, los señores RUBIEL DE JESÚS CANDAMIL, CANDAMIL, PAULA YULIANA QUINTERO OSORIO, LUZ DARY FRANCO ORREGO y MONICA VIVIANA GALLEGO GALLEGO se desplazaban en calidad de pasajeros por la carretera que de Aguadas conduce a Pácora - Sector Vereda la Blanquita, en un vehículo de servicio público, tipo bus escalera, de placas TAJ 917, conducido por el señor MARINO ANDRÉS LONDOÑO FLÓREZ, cuando en su recorrido parte de la vía se desprendió y el vehículo rodó por la ladera, ocasionando el accidente la muerte de los señores RUBIEL DE JESÚS CANDAMIL CANDAMIL, LUZ DARY FRANCO ORREGO y MONICA VIVIANA GALLEGO GALLEGO, lesiones a la señora PAULA YULIANA QUINTERO OSORIO y la pérdida total del automotor tipo bus de servicio público, marca Ford, modelo 1960 e identificado con la placa TAJ-917. Agrega que la vía en el sector donde ocurrió el accidente se encontraba en mal estado, producto de un proceso de erosión antiguo y sin tratamiento adecuado por parte del encargado de la vía, esto es el Departamento de Caldas.

II. TRÁMITE PROCESAL

Después de surtirse la fase escrita del procedimiento se llevó a cabo la audiencia inicial el día 28 de febrero de 2023 /Exp – Dig – Índice 00022 – Archivo 044/, allí se declaró el saneamiento del proceso, se fijó el litigio y se decretaron las pruebas. La audiencia de pruebas se realizó durante los días 21, 22, 23, 24 de marzo de 2023, 05 y 12 de junio de 2024, en esta última diligencia, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que dentro de los 10 días siguientes presentaran sus alegatos de conclusión por escrito. Vencido el término de traslado de alegatos el proceso ingresó a Despacho para proferir sentencia escrita.

III. ACTUACIÓN DE LA PARTE DEMANDADA:

Dentro de la oportunidad legal ofreció respuesta a la demanda, oponiéndose a las pretensiones de la parte actora y afirmando que el accidente del bus tipo escalera sucedido el 21 de marzo de 2017, no obedeció a falta de mantenimiento de la vía

Aguadas - Pacora a cargo del Departamento de Caldas, tal y como se puede evidenciar en el informe de visita técnica, realizado el 21 de marzo de 2017 por el Ingeniero Civil Juan Carlos Giraldo Mejía, profesional adscrito a la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Caldas, en el que se afirma: *"La pérdida de la banca coincide con una alcantarilla cuyo cabezote y algunos pedazos de cuenta y carpeta asfáltica se observaron tirados en el talud inferior a 5 metros del sitio donde fueron construidos resultando difícil establecer el estado real de la vía al momento del accidente"*. Agrega que a la misma conclusión se puede llegar con fundamento en el Informe Policial de Accidente de Tránsito elaborado por el Agente Alejandro Alberto Henao, pues este consignó como causa o hipótesis del accidente la causal 308 "DESPRENDIMIENTO DE LA BANCA".

Sostuvo que, en el presente caso, le puede caber responsabilidad al Municipio de Aguadas, ya que a través de la inspección de tránsito se permitió el sobre cupo del vehículo siniestrado y que aquel emprendiera su viaje a pesar de las condiciones climáticas que se presentaban.

De igual manera, en los escritos de contestación de demanda formuló las siguientes excepciones:

1. Falta de legitimación en la causa por activa: Argumentó que los señores Juan David Quintero Osorio, Veronica y Claudia Patricia Gallego Gallego, no confirieron poder para presentar la demanda, además que el señor Nicanor Franco Franco, no es el abuelo ni el padre de la señora Luz Dary Franco Orrego.

2. Hecho exclusivo y determinante de un tercero: Afirmó que la responsabilidad en los hechos que desencadenaron en el accidente del 21 de marzo de 2017, recae en el conductor del vehículo siniestrado señor MARINO ANDRES LONDOÑO FLOREZ, pues no obstante las condiciones climáticas adversas, decidió de forma irresponsable emprender el viaje, además con un claro sobrecupo en el vehículo.

2. Inexistencia de falla en el servicio imputable al Departamento de Caldas: Sostuvo que la Secretaría de Infraestructura no recibió ninguna solicitud o reporte de alguna autoridad o ciudadano sobre el punto en donde se presentó el accidente, y los que se recibieron de la comunidad del Municipio de Aguadas, en ningún momento hacían referencia al sitio específico donde ocurrió el siniestro, ni se menciona siquiera que haya erosión o pérdida parcial de la banca.

3. Inexistencia de nexo de causalidad e inexistencia de la obligación: Indicó que como quiera que la causa efectiva del daño fue generada por el hecho exclusivo y determinante de un tercero, esto es del conductor del bus tipo escalera, se rompe el nexo causal, razón por la cual no se puede imputar responsabilidad alguna al Departamento de Caldas.

4. Genérica: Pide que se declare probada cualquier excepción que resulte configurada.

IV. ACTUACIÓN LLAMADA EN GARANTÍA – SEGUROS DEL ESTADO:

Respecto a los hechos de la demanda señala que no le constan, por cuanto nada tuvo que ver en el accidente de tránsito y sus consecuencias.

Frente a la demanda planteó las siguientes excepciones:

1. Fuerza mayor o caso fortuito: Sostiene que el hecho acaecido el 21 de marzo de 2017 fue imprevisible e irresistible para el Departamento de Caldas, teniendo en cuenta que no conoció de manera previa sobre el supuesto mal estado de la vía, en el mes de enero se había realizado una intervención sobre la vía para mejorar su transitabilidad, el día previo se presentaron lluvias, el día del accidente la neblina era espesa y existía poca visibilidad y se permitió que el conductor del vehículo transitara con sobrecupo.

2. culpa de un tercero: Afirma que de conformidad con el material probatorio del proceso, resulta claro que el accidente ocurrió como consecuencia de la conducta imprudente del conductor del vehículo, ello debido al sobrecupo y al realizar el desplazamiento a pesar de las condiciones climáticas.

3. Inimputabilidad del daño frente al Departamento de Caldas: Estima que no existe imputabilidad frente al Departamento de Caldas del daño y los perjuicios ocasionados a los demandantes por cuanto el siniestro sucedió por causas imputables a la naturaleza: lluvias, erosión (sic) y movimiento de tierra.

De igual manera, respecto al llamamiento en garantía planteó las siguientes excepciones:

1. Inoperancia y/o ausencia de cobertura del contrato de seguro por cuanto en el caso particular se han configurado varias exclusiones: Manifiesta que Seguros del Estado S.A. ha sido llamada en garantía por el Departamento de Caldas, en razón a la existencia de una Póliza tomada en coaseguro con otras dos compañías aseguradoras, asumiendo Seguros del Estado S.A., el 30% del riesgo descrito en la carátula de la Póliza y siendo Axa Colpatria la compañía líder.

Agrega que en el hipotético caso de una sentencia condenatoria en contra del Departamento de Caldas, las pretensiones de los llamamientos en garantía no están llamadas a prosperar, toda vez que en la póliza se excluyeron de cobertura los eventos por variaciones, inconsistencias, hundimientos o asentamiento del suelo.

2. Coaseguro pactado: Indica que de conformidad con la póliza de responsabilidad que sirvió de fundamento para el llamamiento, se pactó un límite de responsabilidad del 30% para Seguros del Estado, razón por la cual en el evento que resulte condenado el Departamento de Caldas su responsabilidad no podrá ir más allá de ese porcentaje.

3. Deducible y sublímites pactados: En el evento que resulte afectada la póliza de responsabilidad, se deberá tener en cuenta que dentro de la misma se pactó un deducible y sublímites.

4. Genérica: Se declare por el Despacho cualquier hecho o circunstancia que resulte probada.

V. ACTUACIÓN LLAMADA EN GARANTÍA – AXA COLPATRIA:

Respecto a los hechos de la demanda señala que sólo es cierto que el día 21 de marzo de 2017, el vehículo de placas TAJ917, que era conducido por el señor Marino Andrés Londoño Flórez, sufrió un accidente de tránsito.

Frente a la demanda planteó las siguientes excepciones:

1. Inexistencia de responsabilidad del Departamento de Caldas: Sostiene que el Departamento de Caldas no omitió sus obligaciones de mantenimiento de la vía, pues el hecho que el accidente se produjera por un desplome de la carretera no implica el incumplimiento de sus deberes y en ese mismo sentido no existe nexo causal entre el daño alegado y la conducta del ente territorial.

Agrega que frente al accidente se debe considerar que el conductor del vehículo Marino Andrés Londoño Flórez emprendió el viaje, asumiendo las condiciones climáticas y permitiendo el sobrecupo de pasajeros

2. Inexistencia de daño indemnizable: Afirma que la mayoría de los perjuicios pretendidos son de carácter inmaterial; sin embargo, no se prueban las condiciones de vida que resultaron alteradas como consecuencia de los hechos alegados en la demanda.

En cuanto a los daños materiales estima que no se ha demostrado por la parte actora el detrimento patrimonial alegado.

Finalmente considera que no existe nexo causal entre el daño alegado y la conducta del Departamento de Caldas, es decir, que aquella tuviera alguna incidencia en el hecho que dio origen al proceso, más aún cuando se puede evidenciar que se configuró una conducta propia de la víctima y el hecho de un tercero.

De igual manera, respecto al llamamiento en garantía planteó las siguientes excepciones:

1. Contrato de seguro bajo la modalidad de coaseguro: Indica que de conformidad con la póliza de responsabilidad que sirvió de fundamento para el llamamiento, se pactó un coaseguro con Allianz Seguros en 30%, Seguros del Estado en 30% y Axa Colpatria en un 40%, razón por la cual en el evento que resulte condenado el Departamento de Caldas, Axa Colpatria sólo deberá responder por el 40% del valor asegurado.

2. Límite del valor asegurado: Aclara que en el caso que exista alguna responsabilidad, la aseguradora sólo responde hasta la suma asegurada, esto es \$4.000.000.000.oo.

3. Disponibilidad del valor asegurado: Sostiene que al momento de la sentencia, el despacho deberá verificar si efectivamente existe disponibilidad del valor asegurado, situación que no puede ser indicada en este momento procesal.

4. Deducible pactado: En el evento que resulte afectada la póliza de responsabilidad, se deberá tener en cuenta que dentro de la misma se pactó un deducible del 10% del valor de la pérdida.

VI. ACTUACIÓN LLAMADA EN GARANTÍA – ALLIANZ SEGUROS S.A.:

La entidad no ofreció respuesta a la demanda ni al llamamiento en garantía.

VII. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:

- LLAMADA EN GARANTÍA – SEGUROS DEL ESTADO: Señaló que no se logró demostrar que la vía donde ocurrió el accidente de tránsito objeto del litigio, se encontrara con pérdida de la banca previo a la caída del bus escalera, o que la misma cediera al momento en que el automotor pasó por este sitio, lo que en otras palabras quiere decir, que no se pudo establecer el estado real de la vía esa madrugada del 21 de marzo de 2017.

Indicó que las condiciones climáticas y el sobrecupo del vehículo involucrado fueron las únicas causantes del siniestro, pues según reporte del Cuerpo de Bomberos, se señala que ese día se presentó una humedad del 74% y una temperatura de 15 grados centígrados, lo que significa que es altamente probable que el conductor no tuviera plena visibilidad de la vía, y la decisión que este debió haber tomado como garante de la seguridad de sus pasajeros, era detener completamente el rodante hasta que las condiciones climáticas cambiaran un poco, y no haber permitido que se presentara un sobrecupo, pues esta situación claramente afectó la manera en que podía maniobrar el vehículo.

Igualmente reitera los argumentos de defensa expuestos frente al llamamiento en garantía y las condiciones pactadas.

- LLAMADA EN GARANTÍA - AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.: Refirió que en el proceso no se logró demostrar que por parte de la comunidad se hubiese realizado un requerimiento al Departamento de Caldas por el mal estado de la vía para el momento del accidente, al tiempo que señaló que el conductor del vehículo actuó de manera irresponsable al haber iniciado el viaje a pesar de las malas condiciones climáticas y con sobrecupo de pasajeros.

De otra parte, reitera los argumentos expuestos frente al llamamiento en garantía.

- **PARTE DEMANDANTE:** Después de reiterar varios de los argumentos expuestos en el escrito de demanda y hacer referencia a las pruebas recaudadas en el proceso, sostiene que quedó demostrado: i) Que el accidente se debió al inadecuado mantenimiento vial; ii) El Departamento no logró demostrar la fuerza mayor o el caso fortuito, entre otras cosas, porque conocía de las malas condiciones viales con anterioridad al accidente y era su deber detectar y reparar los puntos críticos de la vía; iii) No se demostró que el accidente haya ocurrido por culpa del conductor al haber conducido el vehículo con sobrecupo y en malas condiciones climáticas, ello por cuanto el siniestro ocurrió debido al desprendimiento de la vía, causado por la pérdida de la capacidad de soporte del carretable, dada la ausencia de obras civiles para el manejo de taludes y aguas. Es decir, esto último fue la causa determinante del suceso.

- **PARTE DEMANDADA:** Afirmó lo siguiente: i) Las diferentes pruebas que reposan en el expediente permiten concluir el accidente del 21 de marzo de 2017, no se presentó por falta de mantenimiento de la vía, sino por causas que constituyen eximentes de responsabilidad, como las denominadas hecho de un tercero y culpa exclusiva de la víctima; ii) La parte actora no logró demostrar que el daño antijurídico resulta imputable al Departamento de Caldas y iii) Refuta el dictamen pericial con el que se pretende demostrar los perjuicios por la pérdida total del vehículo tipo bus de placas TAJ917, a partir del valor del denominado cupo y el modelo del automotor.

- **LLAMADA EN GARANTÍA – ALLIANZ SEGUROS S.A.:** Afirmó que la parte actora no logró demostrar que el daño acaecido en la carretera hubiera sido como consecuencia de un actuar o de una omisión en el servicio atribuible al ente territorial demandado, es decir por falta de mantenimiento de la vía, puesto que no se evidencia que la banca hubiera cedido con antelación al acontecimiento presentado el 21 de marzo de 2017, lo cual hubiera permitido al Departamento de Caldas realizar las gestiones pertinentes para la reparación y señalización de la misma.

Agregó que el accidente objeto de este debate es consecuencia del actuar determinante e imprudente del señor Marino Andrés Londoño, ya que emprendió el tránsito del vehículo a pesar de las pésimas condiciones climáticas y con sobrecupo, desatendiendo las normas de tránsito dispuestas y provocando exclusivamente la concreción de los perjuicios.

Expuso que en el presente caso el daño estuvo determinado por una fuerza mayor o caso fortuito, estructurado en las condiciones climáticas, el cual como hecho de la naturaleza escapa a la esfera de las obligaciones del Departamento de Caldas.

Frente al llamamiento en garantía señaló que, al no existir responsabilidad en los hechos de la demanda por parte del asegurado, no surge ninguna obligación para la compañía aseguradora. Añadiendo que en todo caso, en el evento de cualquier responsabilidad por parte del asegurado, se deberá tener en cuenta las condiciones

pactadas en la póliza de seguro, en especial en relación con el coaseguro, deducible y el límite del valor asegurado.

MINISTERIO PÚBLICO: No rindió concepto.

CONSIDERACIONES

EXCEPCIONES PROPUESTAS

El Departamento de Caldas, como medio de defensa formuló las excepciones que denominó como: *“Falta de legitimación en la causa por activa, Hecho exclusivo y determinante de un tercero; Inexistencia de la falla en el servicio imputable al Departamento de Caldas; Inexistencia de nexo causalidad e inexistencia de la obligación y genérica”*.

La llamada en garantía – Seguros del Estado planteó frente a la demanda las excepciones que definió como *“Fuerza mayor o caso fortuito, Culpa de un tercero e Inimputabilidad del daño frente al Departamento de Caldas.”*

Por su parte, la llamada en garantía - Axa Colpatria formuló frente a las pretensiones de la parte actora las siguientes excepciones *“Inexistencia de responsabilidad del Departamento de Caldas e Inexistencia de daño indemnizable.”*

Así las cosas, teniendo en cuenta la forma como fueron planteadas las excepciones, éstas serán resueltas conjuntamente con el fondo del asunto por tener relación directa con el mismo.

PROBLEMA Y ANÁLISIS JURÍDICO:

En la fijación del litigio, se indicó que la controversia, se centraría en dilucidar lo siguiente: *“¿Concurren los presupuestos necesarios para declarar la responsabilidad del DEPARTAMENTO DE CALDAS, por los daños que la parte actora manifiesta haber soportado como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el día 21 de marzo de 2017, en la vía que del Municipio de Aguadas conduce a Pácora – Sector “La Blanquita”, en el que perdieron la vida los señores RUBIEL DE JESÚS CANDAMIL CANDAMIL, LUZ DARY FRANCO ORREGO, MÓNICA VIVIANA GALLEGO GALLEGO; resultó lesionada la señora PAULA YULIANA QUINTERO OSORIO y quedó afectado el automotor de servicio público, tipo bus, de placas TAJ-917, marca Ford, modelo 1960?”*

Para resolver lo anterior, se formularon los siguientes problemas jurídicos:

¿Cuál es el régimen de responsabilidad aplicable al presente caso?

¿Se demostró la responsabilidad del DEPARTAMENTO DE CALDAS en el accidente tránsito ocurrido el día 21 de marzo de 2017, en la vía que del Municipio de Aguadas conduce a Pácora – Sector “La Blanquita”, en el cual perdieron la vida

los señores RUBIEL DE JESÚS CANDAMIL CANDAMIL, LUZ DARY FRANCO ORREGO y MÓNICA VIVIANA GALLEGO GALLEGO; resultó lesionada la señora PAULA YULIANA QUINTERO OSORIO y afectado el automotor de servicio público, tipo bus, de placas TAJ-917, marca Ford, modelo 1960?

En caso de prosperar las pretensiones, ¿qué perjuicios se causaron y en qué cuantía? Así mismo, en caso de proceder las pretensiones de la demanda, ¿deben las llamadas en garantía concurrir al pago total o parcial de la condena, o se configura alguna causal de exclusión de acuerdo con los respectivos contratos de seguros? Todo lo anterior, conforme a los coaseguros pactados.

II) RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE:

Es necesario recordar que en nuestro sistema legal la Administración Pública en su actuación cuenta con los siguientes mecanismos jurídicos a través de los cuales se concreta: actos administrativos (éstos pueden ser expresos o presuntos, tácitos o implícitos), hechos administrativos, omisiones administrativas, operaciones administrativas y los contratos; todas estas actuaciones son susceptibles de ser conocidas por la Jurisdicción Contencioso Administrativa, tal y como lo estipula el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, ya que resulta indiscutible que en todas esas actuaciones puedan generarse daños que dan lugar a juicios de responsabilidad.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado tiene el deber de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas, norma que le sirve de fundamento al artículo 140 de la Ley 1437 de 2011 que consagra la acción de reparación directa, cuyo ejercicio dio origen al presente proceso y que establece la posibilidad que tiene el interesado de demandar la reparación del daño cuando su causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

La responsabilidad del Estado puede surgir en virtud de diversos títulos de imputación, tales como la falla del servicio, el daño especial, o la denominada teoría del riesgo, que obedecen a diversas situaciones en las cuales el Estado, a través de sus autoridades, está llamado a responder por la producción de un daño antijurídico.

En el sub-lite se imputa a la entidad demandada responsabilidad por los presuntos daños causados con la muerte de los señores RUBIEL DE JESÚS CANDAMIL CANDAMIL, LUZ DARY FRANCO ORREGO y MÓNICA VIVIANA GALLEGO GALLEGO; las lesiones de la señora PAULA YULIANA QUINTERO OSORIO y la pérdida total del automotor de servicio público, tipo bus, de placas TAJ-917, marca Ford, modelo 1960, el día 21 de marzo de 2017, cuando se desplazaban por la vía que del Municipio de Aguadas conduce al Municipio de Pácora, y al ceder la banca de la carretera el automotor rodó por el barranco.

Ahora bien, en casos como el presente en donde se discute la responsabilidad del Estado por un daño proveniente en la omisión del deber de cuidado y mantenimiento de las vías, el régimen de imputación aplicable se enmarca en el régimen de responsabilidad por falla en el servicio.

Para definir lo anterior el Consejo de Estado ha manifestado, que el régimen de *falla en el servicio*, es procedente como título de imputación, si se observa que el daño no fue accidental, sino que tuvo su causa en una falla del servicio. En este caso, será precisamente bajo éste título subjetivo de imputación que deba resolverse el respectivo caso, en virtud de que, a través del análisis que el juez contencioso administrativo lleva a cabo en el proceso de reparación, cumple una labor de pedagogía hacia la Administración, dirigida a que ésta adopte medidas encaminadas a que su conducta falente no se repita y, además, porque en ese caso, la Administración podrá repetir contra sus agentes o ex agentes, si éstos actuaron con culpa grave o dolo.

Por último, respecto de la *falla en el servicio probada*, ha de decirse que surge a partir de la comprobación de haberse producido el hecho como consecuencia de una violación -conducta activa u omisiva- del contenido obligacional a cargo del Estado determinado en la Constitución Política y en la ley, lo cual, como ya se dijo, supone una labor de diagnóstico por parte del juez de las falencias en las que incurrió la Administración, e implica -por supuesto- un juicio de reproche. Por su parte, la entidad pública demandada solo podrá exonerarse de la declaratoria de responsabilidad en tales casos si prueba que su actuación no constituyó una vulneración a ese contenido obligacional que le era exigible, es decir, que acató los deberes a los que se encontraba obligada -positivos o negativos- o, si demuestra que medió una causa extraña como fuerza mayor, el hecho exclusivo y determinante de la víctima o el hecho también exclusivo y determinante de un tercero.¹

II) CASO CONCRETO:

1) EL DAÑO:

Para que exista responsabilidad, es necesario la ocurrencia de un daño y, por daño ha de entenderse la lesión efectiva y definitiva a un derecho o a un interés jurídicamente tutelado de una persona; el daño deberá ser personal, cierto y directo, tal y como lo explica Mazeaud:

“Es un principio fundamental del derecho francés, aun cuando no esté formulado en ningún texto legal, que, para proceder judicialmente, hay que tener un interés: «Donde no hay interés, no hay acción». Una vez establecido el principio, ha surgido el esfuerzo para calificar ese interés que es necesario para dirigirse a los tribunales:

¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Consejero ponente: HERNAN ANDRADE RINCON, Bogotá, D. C., ocho (8) de junio de dos mil once (2011), Radicación número: 19001-23-31-000-1998-05110-01(20328), Actor: ANA MILENA TORRES Y OTROS, Demandado: DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

debe ser cierto, debe ser personal. Pero se agrega: debe ser «legítimo y jurídicamente protegido» [...]”².

Así, los elementos constitutivos del daño son: (1) la certeza del daño; (2) el carácter personal, y (3) directo. El carácter cierto, como elemento constitutivo del daño se ha planteado por la doctrina tanto colombiana como francesa, como aquel perjuicio actual o futuro, a diferencia del eventual³. Al efecto, el Consejo de Estado, ha manifestado que para que el daño pueda ser reparado debe ser cierto⁴⁻⁵, esto es, no un daño genérico o hipotético sino específico, cierto: el que sufre una persona determinada en su patrimonio:

“[...] tanto doctrinal como jurisprudencialmente ha sido suficientemente precisado que dentro de los requisitos necesarios para que proceda la reparación económica de los perjuicios materiales, es indispensable que el daño sea cierto; es decir, que no puede ser eventual, hipotético, fundado en suposiciones o conjeturas; aunque no se opone a dicha certeza la circunstancia de que el daño sea futuro. Lo que se exige es que no exista duda alguna sobre su ocurrencia”⁶.

En el presente caso, según la demanda, se reitera, el daño por el cual se reclama indemnización se originó con la muerte de los señores RUBIEL DE JESÚS CANDAMIL CANDAMIL, LUZ DARY FRANCO ORREGO y MÓNICA VIVIANA GALLEGO GALLEGO; las lesiones de la señora PAULA YULIANA QUINTERO OSORIO y la pérdida total del automotor de servicio público, tipo bus, de placas TAJ-917, marca Ford, modelo 1960, el día 21 de marzo de 2017, cuando se desplazaban por la vía que del Municipio de Aguadas conduce al Municipio de Pácora, y al ceder la banca de la carretera el automotor rodó por el barranco.

En ese orden de ideas, se verificará la ocurrencia de este primer elemento de la responsabilidad en cada uno de los casos:

A) Primer grupo familiar: (RUBIEL DE JESÚS CANDAMIL CANDAMIL - Fallecido):

➤ Registro civil de defunción del señor Rubiel de Jesús Candamil Candamil /Exp Dig – Índice 00022 – Archivo 003 - fl. 10/.

➤ Informe accidente de tránsito elaborado por la Inspección de Tránsito y Transporte del Municipio de Aguadas /Exp Dig – Índice 00022 – Archivo 003 - fls. 181 a 190/.

² MAZEAUD. Lecciones de derecho civil. Parte primera. Volumen I. Introducción al estudio del derecho privado, derecho objetivo y derechos subjetivos. Traducción de Luis Alcalá-Zamora y Castillo. Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1959, p.510.

³ CHAPUS. “Responsabilité Publique et responsabilité privée”, ob., cit., p.507.

⁴ Sección Tercera, sentencia de 2 de junio de 1994, expediente 8998.

⁵ Sección Tercera, sentencia de 19 de octubre de 1990, expediente 4333.

⁶ Salvamento de voto del Consejero de Estado Joaquín Barreto al fallo del 27 de marzo de 1990 de la Plenaria del Consejo de Estado, expediente S-021.

➤ Informe Policial de Accidente de Tránsito No A00160422 del 21 de marzo de 2017 /Exp Dig – Índice 00022 – Archivo 003 - fls. 191 a 194/.

➤ Informe pericial de necropsia médico legal No 2017010117013000002 /Exp Dig – Índice 00022 – Archivo 047 - fl. 27 a 32/.

Las pruebas referidas permiten concluir que el señor **RUEBIEL DE JESÚS CANDAMIL CANDAMIL**, falleció en el accidente de tránsito ocurrido el día 21 de marzo de 2017, cuando se desplazaba en un vehículo de servicio público por la vía que del Municipio de Aguadas conduce al Municipio de Pácora.

B) Segundo grupo familiar: (PAULA YULIANA QUINTERO OSORIO- Lesionada):

➤ Historia clínica correspondiente a la atención recibida el día 21 de marzo de 2017 /Exp Dig – Índice 00022 – Archivo 003 - fls. 22 a 23 y 30 a 76/.

➤ Informe técnico médico legal de lesiones no fatales /Exp Dig – Índice 00022 – Archivo 003 - fls. 27 a 29/.

➤ Informe Policial de Accidente de Tránsito No A00160422 del 21 de marzo de 2017 /Exp Dig – Índice 00022 – Archivo 003 - fls. 191 a 194/.

Las pruebas referidas permiten concluir que la señora **PAULA YULIANA QUINTERO OSORIO**, resultó lesionada en un accidente de tránsito ocurrido el día 21 de marzo de 2017, cuando se desplazaba en un vehículo de servicio público por la vía que del Municipio de Aguadas conduce al Municipio de Pácora.

C) Tercer grupo familiar: (LUZ DARY FRANCO ORREGO – Fallecida):

➤ Registro civil de defunción de la señora Luz Dary Franco Orrego /Exp Dig – Índice 00022 – Archivo 003 - fl. 87/.

➤ Informe accidente de tránsito elaborado por la Inspección de Tránsito y Transporte del Municipio de Aguadas /Exp Dig – Índice 00022 – Archivo 003 - fls. 181 a 190/.

➤ Informe Policial de Accidente de Tránsito No A00160422 del 21 de marzo de 2017 /Exp Dig – Índice 00022 – Archivo 003 - fls. 191 a 194/.

➤ Informe pericial de necropsia médico legal No 201701011701300000 /Exp Dig – Índice 00022 – Archivo 047 - fl. 21 a 26/.

Las pruebas referidas permiten concluir que la señora **LUZ DARY FRANCO ORREGO**, falleció en un accidente de tránsito ocurrido el día 21 de marzo de 2017, cuando se desplazaba en un vehículo de servicio público por la vía que del Municipio de Aguadas conduce al Municipio de Pácora.

D) Cuarto grupo familiar: (MÓNICA VIVIANA GALLEGO GALLEGO – Fallecida):

- Registro civil de defunción de la señora Mónica Viviana Gallego Gallego /Exp Dig – Índice 00022 – Archivo 003 - fl. 118/.
- Informe accidente de tránsito elaborado por la Inspección de Tránsito y Transporte del Municipio de Aguadas /Exp Dig – Índice 00022 – Archivo 003 - fls. 181 a 190/.
- Informe Policial de Accidente de Tránsito No A00160422 del 21 de marzo de 2017 /Exp Dig – Índice 00022 – Archivo 003 - fls. 191 a 194/.
- Informe pericial de necropsia médico legal No 201701011701300000 /Exp Dig – Índice 00022 – Archivo 064 - fl. 205 a 210/.

Las pruebas referidas permiten concluir que la señora **MÓNICA VIVIANA GALLEGO GALLEGO**, falleció en un accidente de tránsito ocurrido el día 21 de marzo de 2017, cuando se desplazaba en un vehículo de servicio público por la vía que del Municipio de Aguadas conduce al Municipio de Pácora.

E) Quinto grupo: (Marino Londoño – Propietario del vehículo de placas TAJ917):

- Fotocopia de la tarjeta de propiedad o licencia de tránsito del vehículo de placas TAJ 917 /Exp Dig – Índice 00022 – Archivo 003 - fls. 164/.
- Certificado de afiliación a la Cooperativa /Exp Dig – Índice 00022 – Archivo 003 - fls. 168/.
- Informe accidente de tránsito elaborado por la Inspección de Tránsito y Transporte del Municipio de Aguadas /Exp Dig – Índice 00022 – Archivo 003 - fls. 181 a 190/.
- Informe Policial de Accidente de Tránsito No A00160422 del 21 de marzo de 2017 /Exp Dig – Índice 00022 – Archivo 003 - fls. 191 a 194/.
- Formato informe de investigador de laboratorio -FPJ11- /Exp Dig – Índice 00022 – Archivo 003 - fls. 264 a 265/.

Estos documentos permiten inferir lo siguiente: i) El vehículo de placas TAJ 917, marca Ford, Línea 600, modelo 1960, color blanco y negro, tipo bus, con carrocería abierta, con No de motor FE6106834C y No de chasis F60D0E43303, es de propiedad del señor **MARINO LONDOÑO**, identificado con la cédula de ciudadanía No 4335734; ii) El vehículo de placas TAJ 917 resultó afectado en el accidente de tránsito ocurrido el día 21 de marzo de 2017, cuando transitaba por la vía que del Municipio de Aguadas conduce al Municipio de Pácora.

2) OBLIGACIONES NORMATIVAMENTE IMPUESTAS A LA ENTIDAD DEMANDADA Y SU GRADO DE CUMPLIMIENTO.

Se recuerda que en el presente asunto, se imputa a la entidad demandada responsabilidad por los presuntos daños causados por las lesiones del demandante en un accidente de tránsito, según se dice en la demanda por el mal estado de mantenimiento de la vía y la falta de medidas de seguridad vial y/o ausencia de señalización vial.

Así las cosas, debe empezar el Despacho por indicar que al tenor de lo dispuesto en el artículo 82 de la Carta Política, es deber del Estado, velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.

La misma Constitución Política, dispone:

“Artículo 305: Son atribuciones del gobernador:

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del Gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos del Concejo.”

Es importante señalar, que por ser los gobernadores la primera autoridad de policía en el respectivo departamento, son los encargados de hacer cumplir las normas constitucionales y legales, entre las cuales se encuentran las correspondientes a la protección del uso y goce del espacio público.

El espacio público, se encuentra definido en el artículo 5° de la Ley 9ª de 1989⁷ de la siguiente manera:

“... (...) el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de las necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes”.

Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la circulación tanto peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares, las necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos, para la instalación y uso de los elementos constitutivos del amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para la preservación de las obras de interés público y de los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y artísticos, para la conservación y preservación del paisaje y los elementos naturales del entorno

⁷ Por la cual se dictan normas sobre Planes de Desarrollo Municipal, Compra – Venta y Expropiación de Bienes y se dictan otras disposiciones.

de la ciudad, los necesarios para la preservación y conservación de las playas marinas y fluviales, los terrenos de bajamar, así como sus elementos vegetativos, arenas y corales y, en general, por todas las zonas existentes o debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que constituyen por consiguiente zonas para el uso y disfrute colectivo”.

El Decreto 1504 de 1998⁸, acoge en su artículo 2° la definición antes transcrita y en su artículo 3°, precisa que el espacio público comprende, entre otros, los siguientes aspectos:

- “a) Los bienes de uso público, es decir aquellos inmuebles de dominio público cuyo uso pertenece a todos los habitantes del territorio nacional, destinados al uso o disfrute colectivo;***
- b) Los elementos arquitectónicos, espaciales y naturales de los inmuebles de propiedad privada que por su naturaleza, uso o afectación satisfacen necesidades de uso público;*
- c) Las áreas requeridas para la conformación del sistema de espacio público en los términos establecidos en este decreto (...).”.*

Igualmente, en el artículo 5°, ibídem, referente a los elementos constitutivos y complementarios del espacio público, precisa que entre los constitutivos del mismo, ya sean artificiales o construidos, se encuentra:

“Elementos constitutivos

(...)

Elementos constitutivos artificiales o construidos.

- a) Áreas integrantes de los sistemas de circulación peatonal y vehicular, constituidas por: i) Los componentes de los perfiles viales tales como: áreas de control ambiental, zonas de mobiliario urbano y señalización, cárcamos y ductos, túneles peatonales, puentes peatonales, escalinatas, bulevares, alamedas, rampas para discapacitados, andenes, malecones, paseos marítimos, camellones, sardineles, cunetas, ciclistas, ciclovías, estacionamiento para bicicletas, estacionamiento para motocicletas, estacionamientos bajo espacio público, zonas azules, bahías de estacionamiento, bermas, separadores, reductores de velocidad, calzadas, carriles;*

(...)

Elementos complementarios

- b) Componentes del amoblamiento urbano*

(...)

⁸ “Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial”.

2. Señalización

(...)

b. Elementos de señalización vial para prevención, reglamentación, información, marcas y varias;

(...)” - Resaltado fuera del texto-

Dentro de este contexto, tanto las calles, carreras, y en general las vías públicas, constituyen espacio público respecto del cual el Estado tiene la obligación de resguardar, preservar al uso común, y mantener en óptimas condiciones, tarea que las autoridades de acuerdo al nivel territorial respectivo les compete en pro de garantizar la libre y segura circulación tanto peatonal como vehicular por las respectivas zonas, y su utilización para los fines previstos, de conformidad con su particular reglamentación.

De otra parte, debe indicarse que la ley 769 de 2002 – Código Nacional de Tránsito Terrestre – contiene en su artículo 2º, una serie definiciones, de las cuales traemos a colación las siguientes:

“ARTÍCULO 2º. DEFINICIONES. Para la aplicación e interpretación de este código, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

Calzada: Zona de la vía destinada a la circulación de vehículos.

(...)

Carretera: vía cuya finalidad es permitir la circulación de vehículos, con niveles adecuados de seguridad y comodidad.

Carril: Parte de la calzada destinada al tránsito de una sola fila de vehículos.

(...)

Croquis: Plano descriptivo de los pormenores de un accidente de tránsito donde resulten daños a personas, vehículos, inmuebles, muebles o animales, levantado en el sitio de los hechos por el agente, la policía de tránsito o por la autoridad competente.

(...)

Pasajero: Persona distinta del conductor que se transporta en un vehículo público.

(...)

Señal de tránsito: Dispositivo físico o marca especial. Preventiva y reglamentaria e informativa, que indica la forma correcta como deben transitar los usuarios de las vías.

(...)

Vía: Zona de uso público o privado, abierta al público, destinada al tránsito de vehículos, personas y animales.

(...)"

La misma norma, en su artículo 3º define de manera jerárquica las autoridades de tránsito:

"ARTÍCULO 3o. AUTORIDADES DE TRÁNSITO. <Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley 1383 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> Para los efectos de la presente ley entiéndase que son autoridades de tránsito, en su orden, las siguientes:

El Ministro de Transporte.

Los Gobernadores y los Alcaldes.

Los organismos de tránsito de carácter departamental, municipal o Distrital.

La Policía Nacional a través de la Dirección de Tránsito y Transporte.

Los Inspectores de Policía, los Inspectores de Tránsito, Corregidores o quien haga sus veces en cada ente territorial.

La Superintendencia General de Puertos y Transporte.

Las Fuerzas Militares para cumplir exclusivamente lo dispuesto en el parágrafo 5o de este artículo.

Los Agentes de Tránsito y Transporte.

(...)"

El artículo 5º - Código Nacional de Tránsito Terrestre-, le asignó al Ministerio del Transporte la obligación de expedir el respectivo manual de señalización vial, al paso que dispuso que el cumplimiento de dicho manual, sería responsabilidad de cada organismo de tránsito en su jurisdicción. Veamos:

"ARTÍCULO 5o. DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN VIAL. <Artículo modificado por el artículo 3 de la Ley 1383 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> El Ministerio de Transporte reglamentará en un término no mayor de 60 días posteriores a la sanción de esta ley, las características técnicas de la demarcación y señalización de toda la infraestructura vial y su aplicación y cumplimiento será responsabilidad de cada uno de los organismos de tránsito en su respectiva jurisdicción.

PARÁGRAFO 1o. *El Ministerio de Transporte respetará y acogerá los convenios internacionales que se hayan suscrito o se suscriban en relación con la reglamentación de la ubicación, instalación, demarcación y señalización vial.*

PARÁGRAFO 2o. *La información vial y la señalización urbana, deberá hacerse con material antivandálico, vitrificado, que garantice una vida útil mínima de 10 años y, cuando así se aconseje, material retrorreflectante.”*

Igualmente, el artículo 110 *ibídem*, de una parte clasifica y define las diferentes señales de tránsito, y de otra, asigna la responsabilidad de la instalación de las señales de tránsito en los perímetros urbanos en las autoridades locales de tránsito.

“ARTÍCULO 110. CLASIFICACIÓN Y DEFINICIONES. *Clasificación y definición de las señales de tránsito:*

Señales reglamentarias: Tienen por objeto indicar a los usuarios de las vías las limitaciones, prohibiciones o restricciones sobre su uso y cuya violación constituye falta que se sancionará conforme a las normas del presente código.

Señales preventivas: Tienen por objeto advertir al usuario de la vía la existencia de un peligro y la naturaleza de éste.

Señales informativas: Tienen por objeto identificar las vías y guiar al usuario, proporcionándole la información que pueda necesitar.

Señales transitorias: Pueden ser reglamentarias, preventivas o informativas y serán de color naranja. Modifican transitoriamente el régimen normal de utilización de la vía.

(...)

PARÁGRAFO 2o. *Es responsabilidad de las autoridades de tránsito la colocación de las señales de tránsito en los perímetros urbanos inclusive en las vías privadas abiertas al público. Las autoridades locales no podrán ejecutar obras sobre las vías públicas sin permiso especial de las autoridades de tránsito que tendrán la responsabilidad de regular los flujos de tránsito para que no se presenten congestiones.*

(...)”

Y frente a la obligación de garantizar la seguridad vial, el artículo 7º, señaló:

“ARTÍCULO 7o. CUMPLIMIENTO RÉGIMEN NORMATIVO. *Las autoridades de tránsito velarán por la seguridad de las personas y las cosas en la vía pública y privadas abiertas al público. Sus funciones serán de carácter regulatorio y sancionatorio y sus acciones deben ser orientadas a la prevención y la asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías.*

(...)”

De acuerdo con la normatividad precitada, es claro que las autoridades de tránsito (Gobernadores – Alcaldes) asumen una importante labor en la regulación de la circulación tanto peatonal como vehicular, por lo que el contenido obligacional

emanado de la ley, permite que de acuerdo con circunstancias particulares pueda predicarse responsabilidad del Estado por la omisión de los entes territoriales en el cumplimiento de sus funciones.

3. ACCIONES U OMISIONES QUE IMPLIQUEN EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES NORMATIVAMENTE IMPUESTAS.

Expuestos los deberes normativos asignados legal y Constitucionalmente a la entidad demandada, procede el Despacho a determinar si existieron acciones u omisiones que impliquen el incumplimiento de las obligaciones normativamente impuestas.

Para ello, es preciso indicar que el fundamento fáctico expuesto en el libelo introductorio, consiste en la muerte de los señores RUBIEL DE JESÚS CANDAMIL CANDAMIL, LUZ DARY FRANCO ORREGO y MÓNICA VIVIANA GALLEGO GALLEGO; las lesiones de la señora PAULA YULIANA QUINTERO OSORIO y la pérdida total del automotor de servicio público, tipo bus, de placas TAJ-917, marca Ford, modelo 1960, el día 21 de marzo de 2017, cuando se desplazaban por la vía que del Municipio de Aguadas conduce al Municipio de Pácora, y al ceder la banca de la carretera el automotor rodó por el barranco .

El daño en los términos descritos, se atribuye a la entidad demandada por la omisión en el mantenimiento y vigilancia vial, que generó el accidente arriba referido.

De acuerdo con ello, el Despacho estudiará las circunstancias de tiempo modo y lugar en que se presentó el accidente de tránsito ocurrido el 21 de marzo de 2017; para finalmente establecer si el hecho dañoso es endilgable a la entidad demandada, o si existe una eximente de responsabilidad que la libere de condena administrativa.

En este sentido, respecto a la ocurrencia del accidente de tránsito, el encargado de la vía y las condiciones de la carretera en donde se presentó el mismo, dan cuenta los medios de prueba:

- Oficio S.O.P. del 09 de mayo de 2017, suscrito por el Secretario de Obras Públicas del Municipio de Aguadas, en el que se indica que la vía que conduce del Municipio de Aguadas a Pácora, incluyendo en sector de La Blanquita, pertenece al Departamento de Caldas /Exp Dig – Índice 00022 – Archivo 003 - fl. 170/.

- Oficio DS No 0422 del 18 de mayo de 2017, suscrito por el Secretario de Infraestructura del Departamento de Caldas, en el que se informa que la vía que conduce del Municipio de Pácora a Aguadas, pertenece a la red vial del Departamento de Caldas /Exp Dig – Índice 00022 – Archivo 003 - fl. 170/.

- Oficio sin número legible pero fechado abril de 2017, suscrito por el Secretario de Infraestructura del Departamento de Caldas a través del cual se da respuesta a un derecho de petición presentado por el entonces Congresista Arturo Yepes Alzate, en el cual se consignó /Exp Dig – Índice 00022 – Archivo 014 - fl. 56 a 59/:

“(…)

A las peticiones

1. El tramo vial Pacora – Aguadas le fueron efectuadas obras de rehabilitación, pavimentación y repavimentación en el tramo vial 5 con una longitud de 12.7 km, mediante contrato en el año 2005, el valor de las obras destinado fue de \$4.338.613.683,00 M/CTE. Esta vía fue intervenida nuevamente en el año 2011 esta vez las obras de rehabilitación tuvieron una inversión de \$1.991.078.247,00.

(…)

3. La Gobernación de Caldas ha venido efectuando mantenimientos periódicos a todas las vías departamentales, e incluso la vía Pacora – Aguadas recibió mantenimiento en la anualidad 2016, por lo que nos permitimos anexar cuadro de mantenimiento por municipio del año en mención.

(…)”

- Oficio sin número legible calendado 09 de mayo de 2017, suscrito por el Secretario de Infraestructura del Departamento de Caldas a través del cual se da respuesta a un derecho de petición presentado por el señor Alexander García Hernández /Exp Dig – Índice 00022 – Archivo 014 - fl. 63 a 65/:

“(…)

A las Peticiones

1. El tramo vial Pacora – Aguadas es Secundaria.

2. El tramo vial Pacora – Aguadas se repavimento entre los años 2005 y 2006.

3. El mantenimiento de la vía que comunica al municipio de Pácora con el municipio de Agudas le corresponde a la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Caldas.

4. Los recursos para el mantenimiento de la vía que comunica al municipio de Pácora con el municipio de Aguadas provienen del Departamento de Caldas y del Gobierno Nacional.

5. El tramo vial Pacora – Aguadas le fueron efectuadas obras de rehabilitación, pavimentación y repavimentación en el tramo vial 5 con una longitud de 12.7 km, mediante contrato en el año 2005, el valor de las obras destinado fue de \$4.338.613.683.00 M/CTE. Esta vía fue intervenida nuevamente en el año 2011 esta vez las obras de rehabilitación tuvieron una inversión de \$1.981.078.247.00

6. La señalización de la vía Aguadas – Pácora le corresponde a la Gobernación de Caldas a través de la Unidad de Tránsito Departamental de Caldas.

(...)

15. En el sitio exacto accidente (K10+000) no existe señalización, en tramos anteriores y posteriores al K10+000, deben existir las señales mencionadas en el 7.

- Oficio UT 0253 del 26 de abril de 2017, por medio del cual se da respuesta a un derecho de petición elevado por el señor Luis Alberto Giraldo Fernández, suscrito por el Profesional Especializado de la Unidad de Tránsito Departamental /Exp Dig – Índice 00022 – Archivo 014 - fl. 71 a 73/:

“(...)

*Numeral 6. A que autoridad corresponde la señalización de la vía que comunica del municipio de Aguadas (Caldas) al municipio de Pácora (Caldas)

La señalización de la vía Aguadas – Pácora corresponde a la Gobernación de Caldas a través de la Unidad de Tránsito Departamental de Caldas

*Numeral 7. – Que tipo de señales existen a lo largo de la vía que comunica del Municipio de Aguadas (Caldas) al municipio de Pácora (Caldas)

Las señales instaladas a lo largo del tramo vial que del municipio de Aguadas conduce al municipio de Pácora son Señales verticales preventivas (SP-04- SP-03 – SP-06 – SP-08 – SP-05 – SP-09, las cuales previenen la presencia de curvas, curvas y contra - curvas , curvas sucesivas, cerradas y pronunciadas, presencia de escolares en la vía y reglamentarias de control de velocidad; estas señales han sido instaladas muchos años atrás, a la fecha pueden estar deterioradas por efectos climáticos o sin visibilidad por la maleza que las cubre, además pueden haber sido retiradas por personas indeseables, situación que se va a constatar a través de la inspección ocular que será realizada por un funcionario competente para estos efectos de la unidad de tránsito departamental. Por lo que se solicita un tiempo prudente para poder entregar un dato de la señalización más exacto para los fines pertinentes.

*Numeral 10. – Cuál es la autoridad en cargada de hacer seguimiento, vigilancia y control sobre:

1. Las señales de tránsito de la vía que comunica del Municipio de Aguadas(Caldas) a l municipio de Pácora (Caldas)

La Unidad de Tránsito Departamental de Caldas, es la autoridad encargada de realizar el seguimiento de la señalización existente

- Oficio No C.M. 091 del 14 de agosto de 2015, elaborado por el Presidente del Concejo Municipal de Aguadas y dirigido al Gobernador del Departamento de Caldas /Exp Dig – Índice 00022 – Archivo 014 - fl. 82/:

“...)

El Concejo Municipal de Aguadas, Caldas, como Entidad político-administrativa, vocera y representante de la Comunidad, preocupado por el lamentable estado de la carretera Salamina – La Pintada, especialmente en los tramos comprendidos entre Pácora – Aguadas – Arma – Arma – San José, en los cuales hay varios sitios que demandan atención urgente por la alta peligrosidad que representan; conocedores de su compromiso y preocupación por procurar el bienestar y desarrollo de toda la Región Caldense, acude a Usted con el fin de solicitarle respetuosamente, realizar las gestiones pertinentes para que se le haga el mantenimiento necesario y reparación oportuna y adecuada en los sitios que se requiera o haya el riesgo de que se puedan presentar

accidentes y verificar que al realizar la rocería y limpieza se dejen visibles los avisos y señales viales.

...”

- Oficio No A-100-0488 del 12 de septiembre de 2016, suscrito por el Alcalde Municipal de Aguadas – Caldas y dirigido al Gerente de Corpocaldas, en el cual se lee /Exp Dig – Índice 00022 – Archivo 014 - fl. 83/:

“(…)

Por medio de la presente y reconociendo su profundo interés por mejorar la calidad de vida de los habitantes del departamento de Caldas me dirijo a usted con el fin de solicitarle una visita técnica a la vereda la Blanquita (sector Aguadas – Pácora) con el fin de buscar soluciones técnicas a los movimientos masivos de tierra que se han presentado es ese sector y ponen en riesgo la Institución Educativa la Blanquita y la vía misma.”

- Oficio No A-100-0487 del 12 de septiembre de 2016, suscrito por el Alcalde Municipal de Aguadas – Caldas y dirigido al Secretario de Infraestructura del Departamento de Caldas, en el cual se consigna /Exp Dig – Índice 00022 – Archivo 014 - fl. 84/:

Por medio de la presente y reconociendo su profundo interés por mejorar la red vial del departamento de Caldas me dirijo a usted con el fin de solicitarle reductores de velocidad sobre la Vía Aguadas – Pácora (vía departamental) en el sector de la vereda La Blanquita, con el fin de prevenir accidentes a los usuarios de la Institución educativa de dicha vereda.

- Oficio 0333 del 09 de mayo de 2017, suscrito por el Secretario de Infraestructura del Departamento de Caldas, en respuesta al derecho de petición elevado por el señor Alexander García Hernández, en el que se indica /Exp Dig – Índice 00022 – Archivo 014 - fl. 63 a 64/::

“(…)

- 1. El tramo vial Pácora – Aguadas es Secundaria.*
- 2. El tramo vial Pácora – Aguadas se repavimento entre los años 2005 y 2006*
- 3. El mantenimiento de la vía que comunica al municipio de Pácora con el municipio de Aguadas le corresponde a la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Caldas.*
- 4. Los recursos para el mantenimiento de la vía que comunica al municipio de Pácora con el municipio de Aguadas provienen del Departamento de Caldas y del Gobierno Nacional.*
- 5. El tramo vial Pácora – Aguadas le fueron efectuadas obras de rehabilitación, pavimentación y repavimentación en el tramo vial 5 con una longitud de 12.7 km. Mediante contrato en el año 2005, el valor de las obras destinado fue de \$4.338.613.683,00 M/CTE. Esta vía fue intervenida nuevamente en el año 2011, esta vez las obras de rehabilitación tuvieron una inversión de \$1.981.078.247.00.*
- 6. La señalización de la vía Aguadas – Pácora le corresponde a la Gobernación de Caldas a través de la Unidad de Tránsito Departamental de Caldas.*

(...)"

- Oficio UT 0253 del 26 de abril de 2017, suscrito por el Profesional Especializado de la Unidad de Tránsito Departamental, en el cual se señala /Exp Dig – Índice 00022 – Archivo 014 - fl. 71 a 73/:

"Numeral 15.- Que tipo de señalizaciones existían hasta el momento del accidente de la CHIVA, en la vía que comunica municipio de Aguadas (Caldas) al municipio de Pácora (Caldas)

En el sitio exacto del accidente (K10+000) no existe señalización, en tramos anteriores y posteriores al K10+000, deben existir las señales mencionadas en el numeral 7, sin embargo reiteramos que estas pudieron estar al momento del accidente ilegibles, retiradas por manos criminales o tapadas por la maleza, lo cual se va a verificar, para darle mayor claridad a este interrogante.

- Requerimiento presentado por el Presidente del Concejo Municipal de Aguadas calendado 28 de febrero de 2017, al Gobernador del Departamento de Caldas /Exp Dig – Índice 00022 – Archivo 014 - fl. 81/:

El Honorable Concejo Municipal de Aguadas Caldas, presenta un cordial saludo al Gobernador del Departamento, al Secretario de infraestructura y a su equipo de Gobierno, deseándole éxitos en sus labores administrativas para bien de la ciudadanía caldense y en particular para la ciudadanía aguadeña.

Le solicitamos, Señor Gobernador, ante la inminente pérdida de banca en el sitio de Leticia, lo cual dejaría incomunicado a Aguadas y Pácora; ordene lo pertinente para que en la medida de lo posible se habilite y mejore la vía Arma, Naranjal, Riachuelo de Pácora, La Y (Pácora) como vía alterna en caso de la emergencia que ocasionaría la pérdida de la banca en el referido sitio.

- Informe accidente de tránsito fechado el día 22 de marzo de 2017 por el Agente de Tránsito Henao Alejandro Alberto, adscrito a la Inspección de Tránsito y Transporte de Aguadas, en el cual se consignó /Exp Dig – Índice 00022 – Archivo 003 - fls. 181 a 190/:

"(...)

Siendo las 05:15 horas recibí una llamada de la Comunidad quienes me informan que me desplace hacia la Vereda la Blanquita Sector Mi Ranchito en la Vía que de Aguadas conduce hacia el Municipio de Pácora, donde hay un posible accidente de tránsito, Al llegar al lugar evidentemente se encuentra el evento, hallando un vehículo Tipo Bus Escalera el cual se volcó y rodo aproximadamente 34 Metros, el motivo del accidente fue que la banca de la vía cedió produciendo que el vehículo se precipitara al abismo.

(...)" – Destacado fuera del texto.-

- Informe policial de accidentes de tránsito No A00160422 del 21 de marzo de 2017, elaborado por el Agente de Policía de Tránsito Henao Alejandro Alberto. En este documento se consignó lo siguiente: i) El accidente del vehículo de servicio público

tipo bus escalera, afiliado a la empresa Cootransaguadas, Modelo 1960, de placa TAJ-917, ocurrió en el sector de la Vereda la Blanquita – en la vía que de Aguadas conduce a Pácora; ii) En el siniestro se presentaron lesionados y fallecidos; iii) La clase de accidente fue descrita como volcamiento; iv) Como condición climática se describió la presencia de lluvia y niebla; v) Las características de la vía fueron reseñadas de la siguiente forma: recta, doble sentido; una calzada; dos carriles; con superficie en asfalto; **fisurada**; húmeda; sin iluminación artificial; **no se describió la presencia de controles de tránsito, señales verticales, señales horizontales y de demarcación de la vía** y vi) Como causa o hipótesis probable del accidente de tránsito se especificó “*DESPRENDIMIENTO DE LA BANCA.*” /Exp Dig – Índice 00022 – Archivo 003 - fl. 191 a 194/.

- Copia parcial del documento denominado ESTUDIOS Y DISEÑOS – REHABILITACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN VIA PACORA – AGUADAS. TRAMO VIAL No 4 – TOMO 1 – CAPITULO 1 AL 5, elaborado por la firma APA Ltda – Ingenieros Contratistas /Exp Dig – Índice 00022 – Archivo 003 - fl. 191 a 194/. De acuerdo con el documento el objetivo general del estudio fue el de aportar un estudio geotécnico como aporte a la construcción de una estructura de pavimento estable que cumpliera con el nivel o índice de servicio establecido (comodidad y seguridad a los usuarios), que resultara económica, y que brindara la capacidad estructural necesaria para soportar los requerimientos que le sean impuestas por los vehículos que transiten por la vía Pácora – Aguadas.

- Declaración rendida por el Ingeniero Civil Jorge Alonso Aristizábal Arias, en la cual refirió: i) Hizo una relación de su experiencia profesional y laboral como ingeniero civil y de estudios complementarios; ii) Conoce la vía Pácora – Aguadas porque la ha transitado en varias oportunidades, además porque sobre la misma realizó unos estudios técnicos y de consultoría hace aproximadamente unos 19 o 20 años para el contratista de una obra que se iba a ejecutar en la vía, dentro de un proyecto que se denominó plan vial del departamento; iii) No sabe si las obras que fueron objeto del estudio en la vía Pácora – Aguadas, finalmente se ejecutaron; iv) En los últimos tiempos no ha visitado la vía Pácora – Agudas; v) Explica que unas obras adecuadas para el manejo de las aguas implica la existencia de unas cunetas que se encargan de recoger el agua y llevarlas a una caja y de ésta el agua es conducida por unas alcantarillas o transversales que deben sacar el agua ladera abajo a un sitio seguro. Agrega que la falta de transversales o mal estado de ellas, permiten que se genere un proceso de inestabilidad del talud.

- Informe geotécnico fechado septiembre de 2017, de las posibles causas del deslizamiento ubicado en la vía Pácora – Aguadas – Sector “La Blanquita”, elaborado por los geólogos Juliana Grimaldo Flórez y Andrés Felipe Zuluaga Ortigón /Exp Dig – Índice 00022 – Archivo 013 fls. 8 a 63/:

Respecto a la descripción de la carretera se anotó:

5. Indicarán cuáles son las características de la vía y el sector donde se registró el accidente.

Al municipio de Aguadas (Figura 1) se puede acceder de dos maneras: el primero empalma al municipio de Manizales con esta localidad pasando por las poblaciones de Neira, Aránzazu, Salamina y Pácora; y el segundo, utilizando la vía Panamericana que de Manizales conduce a Medellín, desviándose en el municipio de La Pintada con destino al municipio de Aguadas. Estas vías se encuentran en regular estado de conservación, con trechos carentes de asfalto y bajas especificaciones técnicas, dificultando el tránsito especialmente en época de invierno. Sin embargo, la malla vial del municipio de Aguadas tiene buena cobertura por cuanto las carreteras llegan a los sectores rurales más poblados, pero con las limitaciones ya mencionadas.

(...)

El sitio de interés, donde se registró el accidente, se encuentra localizado en el Departamento de Caldas, sector "La Blanquita", en la vía Pacora-Aguadas, bajo las coordenadas N: 1109758.965 y E: 1178497.363.

(...)

Este informe se enfoca en el deslizamiento registrado el 21 de marzo de 2017, en la vía Pacora-Aguadas, sector "La Blanquita", pretendiéndose el análisis de las causas geotécnicas y geológicas determinantes en el deslizamiento en el que perecieron 5 personas.

La visita es realizada el 01 de septiembre de 2017, seis (06) meses después del acontecimiento -21 de marzo de 2017-, razón para que las recomendaciones y conclusiones se presenten con base en la información obtenida el día de la visita, y por ende muchos de los factores geológicos y geotécnicos ya no son tan evidentes. Sin embargo, en los alrededores de la zona se observan deslizamientos y socavaciones concentradas sobre las laderas adyacentes a la vía, grietas de tensión, gran cantidad de afluentes de agua como quebradas y nacimientos que afectan directamente la estabilidad del terreno generando en épocas lluviosas movimientos en masa de gran magnitud por la falta de un adecuado manejo en las fuentes hídricas.

(...)

9. Qué parte de la vía colapsó.

R: Al observar el plano topográfico (Figura 4) suministrado por el ingeniero topógrafo, se puede identificar que la vía medía 6.20m de ancho y la parte que colapsó fue aproximadamente la mitad.

El ancho de la berma depende de la importancia de la vía y en la zona de estudio las bermas tienen un tamaño aproximado de 20cm.

Es importante mencionar que en la zona no se realizaron ensayos in situ, ni tampoco estudios de suelos y por lo tanto, todas las recomendaciones, análisis y conclusiones consignadas en este informe están sustentadas únicamente en el trabajo realizado en campo, en la experiencia profesional y en literatura que apoye este concepto.

En cuanto a los factores que influyeron en el deslizamiento o caída de la banca el informe señaló:

6. Indicarán qué factores influyeron para que se presentara el movimiento en masa en el sector “La Blanquita” el día del siniestro.

R: Con fundamento: En el análisis de las zonas aledañas al deslizamiento; con los datos obtenidos el día de la visita; con el material fotográfico suministrado, se concluye que el deslizamiento afectó casi la mitad de la banca en sentido Aguadas-Pacora, destacando el material fotográfico que las condiciones climáticas eran de bastante lluvia y precipitación, a diferencia del día que se realizó la visita, que como ya se dijo las condiciones podían haber cambiado, se concluye que el movimiento en masa ocurrió debido al manejo inadecuado de las aguas de escorrentía que fluyen en el lugar en época invernal.

En segundo lugar, influyó la litología observada en la zona (Figura 2), por cuanto corresponde a materiales coluviales, los cuales generalmente no son aptos para colocar estructuras sobre ellos; aunque es importante mencionar que en algunas zonas no hay otra opción y por ende se deben tener ciertas consideraciones geológico-geotécnicas, al momento de construir sobre estos materiales.

Con relación a la geología estructural, la zona de manera regional se encuentra afectada por la Falla Salamina y de manera local por algunos lineamientos que pueden afectar la estabilidad de estos materiales.

(...)

Cuando se habla de coluviones, se debe tener en cuenta que estos materiales son evidencia de que han ocurrido deslizamientos en el pasado, situación observada de manera directa en la zona del deslizamiento en donde se encontraron movimientos en masa antiguos (Imagen 1) sucesos que indican que el sector es propenso a este tipo de procesos, sumado a la reptación encontrada en el área, por causa de la presencia de ganado que aumenta la probabilidad que en el sector se produzcan fácilmente movimientos en masa.

(...)

Con fundamento en el material fotográfico suministrado, correspondiente al día del accidente y al observar los fragmentos de las estructuras encargadas del manejo de aguas que existían en el sector, se puede determinar que las aguas de escorrentía, jugaron un papel fundamental en dicho deslizamiento. Lo anterior con fundamento en las evidencias geológicas localizadas en lugar cercano a la zona, donde se observan deslizamientos antiguos y algunas estructuras, que permiten concluir que dichas obras para el manejo de aguas no cumplieron su función o no se encontraban en buen estado. Adicionalmente, para el día de la visita, las cunetas se encontraban en su totalidad cubiertas por material vegetal (Imagen 2), impidiendo cumplir adecuadamente con su función y permitiendo el incremento de la infiltración en el terreno.

En la sustentación del dictamen el perito Andrés Felipe Zuluaga Ortegón sostuvo en esencia lo que se indica a continuación /Exp Dig – Índice 00022 – Archivo 0062/: i) Dio cuenta de su perfil profesional y laboral como geólogo; ii) El dictamen se realizó seis (06) meses después al evento del deslizamiento y, el lugar objeto del estudio se identificó por coordenadas; iii) En la elaboración del dictamen participó un equipo de topografía y, para su realización se acudió a la zona, al sitio en donde ocurrió el evento del deslizamiento; iv) La zona por la composición de los materiales del suelo y la alta pendiente, la hacen muy susceptible a movimientos de masa, allí se

evidenciaban la ocurrencia de eventos anteriores, tal como se pudo observar en cicatrices existentes en el terreno; v) Al momento de la visita se observaron grietas de tensión, lo cual permite inferir que el terreno es propenso a las fallas; vi) En el lugar se evidenció la falta de obras para el manejo de aguas; vii) Según los datos de topografía tomados en el lugar, la vía perdió en el evento un total de 1.40 mts del total, es decir aproximadamente la mitad del carril; viii) No es posible establecer las condiciones del terreno para el momento del evento, teniendo en cuenta que la visita se realizó seis meses después a este; ix) No se pudo evidenciar cómo era el manejo de las aguas de escorrentía ni el estado de las cunetas para el día del evento.

Por su parte en la sustentación del dictamen la perito Juliana Grimaldo Flórez, refirió: i) Efectuó una relación de su preparación académica y de su experiencia laboral y profesional; ii) Para la elaboración del dictamen se utilizó el gps, herramientas de geología, mapa geológico, biografía del sector y visita al lugar.

- Estudio topográfico fechado septiembre de 2017, "LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DESLIZAMIENTO CALZADA LATERAL VÍA PÁCORA – AGUADAS – SECTOR "LA BLANQUITA", elaborado por el topógrafo Eduardo López Garzón /Exp Dig – Índice 00022 – Archivo 013 fls. 65 a 119/. En el documento se realiza un levantamiento planímetro, levantamiento altimétrico, referenciación puntos de coordenadas, entrega de planos y referenciación estudio topográfico en coordenadas magna-sirgas.

En la audiencia de sustentación del dictamen el perito sostuvo: i) El dictamen fue elaborado por solicitud de la firma dirigida por el abogado Benjamín Herrera. El perito hizo una descripción de su perfil profesional y de la experiencia laboral; ii) Para la elaboración del dictamen se utilizó una estación total marca sokkia que se utiliza para tomar datos con una gran precisión, para luego ser llevada al computador y descargar la información del terreno, se genera como una especie de dibujo, con identificación de coordenadas, ello permite establecer la descripción del plano topográfico y mostrar la morfología del sitio; iii) El plano topográfico permite determinar que la vía viene con un ancho de 6.20 mts con cunetas y berma, que luego se reduce en el punto del derrumbe en un ancho de 4.80 mts por un espacio de 15 metros aproximadamente y luego continúa con ancho de 6.20 mts con cunetas y berma. Igualmente se encuentran en ambos lados de la vía la presencia de dos taludes, uno hacia la parte de arriba y otro hacia la parte de abajo con una pendiente fuerte del 60%. El derrumbe que reduce el ancho de la vía se ubica en el carril derecho; iv) Para el momento de la visita no se habían realizado obras para el restablecimiento de la vía, se evidenció la presencia del derrumbe y la existencia de una transversal, obra que se utiliza para la conducción de aguas de las cunetas de un lado hacia el otro por debajo de la vía. La transversal estaba dañada.

- Informe de visita técnica denominado "DOCUMENTACION CASO ACCIDENTE VEHICULAR KM 10+000 VÍA PACORA – AGUADAS - SECTOR VEREDA LA BLANQUITA – MUNICIPIO DE AGUADAS", de fecha 21 de marzo de 2017 y elaborado por el Profesional Universitario Juan Carlos Giraldo de la Secretaría de

“GENERALIDADES

La vía Pácora – Aguadas hace parte de la red vial departamental de acuerdo con la ordenanza 230 de 1997 y tiene una longitud de 12.5 kilómetros pavimentados con excepción de cortos tramos en los que se presentan inestabilidades de orden geológico.

La vía Pácora – Aguadas ha sido afectada en diferentes puntos por las temporadas invernales generando derrumbes y pérdidas parciales de banca.

En la madrugada del martes 21 de marzo de 2017 se presentó un accidente en el K 10+000 de la vía Pácora – Aguadas, que fue difundido por la radio por lo que me desplazé por instrucción del Secretario de Infraestructura del Departamento de Caldas hacia el sitio referido en las emisoras, llegando a este a las doce y treinta del día, habiéndose ya evacuado del sitio la totalidad de pasajeros.

OBSERVACIONES

En el K10+000 de la vía Pácora – Aguadas, vereda la Blanquita, jurisdicción del municipio de Aguadas se encontró un bus tipo escalera de placa TAJ 917, que rodó aproximadamente 50 metros desde la carretera en un sitio donde se evidencia pérdida de la banca, la cual al momento de la inspección presentó un ancho de 4.8 metros y por ende faltando 1.2 metros toda vez que el ancho normal de esta es de 6 metros.

La pérdida de banca coincide con una alcantarilla cuyo cabezote y algunos pedazos de cuneta y carpeta asfáltica se observaron tirados en el talud inferior a 5 metros del sitio donde fueron construidos, resultando difícil establecer el estado real de la vía al momento del accidente.

En el sitio del accidente la vía presenta un tramo recto con suficiente visibilidad con taludes superior e inferior de fuerte pendiente donde se observan vestigios de procesos erosivos de diferentes edades.

RECOMENDACIONES

*Efectuar una visita a los diferentes puntos donde se presentan pérdidas parciales de banca en la vía Pácora – Aguadas, **instalar señales preventivas**, hacer presupuesto de las obras requeridas y sus respectivos estudios cuando se requieran para recuperar el ancho normal y buscar la priorización de estas obras.*

(...)”

En la sustentación del dictamen pericial por parte del Ingeniero Juan Carlos Giraldo Mejía, indicó: i) Es ingeniero civil de profesión, con 36 años de experiencia profesional y labora desde hace 10 años y medio en la Secretaría de Infraestructura

del Departamento de Caldas y para la fecha del accidente que ocupa la atención del Despacho, se desempeñaba como Coordinador de Obras de Mantenimiento de las Carreteras del Norte del Departamento; ii) Hizo presencia en el lugar del accidente el mismo día de su ocurrencia a eso de las 11:00 a.m. El día era frío, había presencia de niebla; iii) La vía que comunica a Pácora con Aguadas, en el lugar exacto del accidente es pavimentada; es un tramo recto de unos 50 metros; en el sitio del accidente se percibía una pérdida parcial de la banca de más o menos 1.20 mts, de una calzada que tiene aproximadamente 6.20 mts; se observó más o menos 5 mts abajo del deslizamiento el cabezote de la transversal, sin que se pudiera determinar si el mismo se había destruido antes o en el momento del deslizamiento; iv) En el sitio del accidente no se han realizado obras con posterioridad al accidente; v) Días anteriores al deslizamiento no se habían ejecutado por el Departamento actividades ni obras en el sector de su ocurrencia, precisando que no se había recibido por parte de la comunidad algún requerimiento en relación con la vía; vi) No logró determinar si al momento del accidente la vía tenía todo su ancho o ya se había producido un pérdida parcial de la misma; vii) Afirmó no conocer la capacidad de soporte de la vía Aguadas – Pácora; viii) Además del cabezote y la transversal referidas, no existían otras obras en el sitio del deslizamiento para el manejo de las aguas; xi) Esa parte de la vía Pácora – Aguadas es un segmento de la vía que presenta muchos procesos erosivos en los taludes superiores e inferiores que históricamente han afectado las condiciones de estabilidad de la vía; xii) A la vía no se le había realizado mantenimiento rutinario en fechas próximas al deslizamiento de tierra y pérdida de la banca.

- Dictamen denominado ***“ANALISIS SOBRE EL INFORME GEOTECNICO DE LAS POSIBLES CAUSAS DEL DESLIZAMIENTO UBICADO EN LA VIA PACORA - AGUADAS, SECTOR “LA BLANQUITA” PRESENTADO POR JULIANA GRIMALDO FLOREZ, GEOLOGA, ANDRES FELIPE ZULUAGA ORTEGON, GEOLOGO, PRESENTADO COMO PRUEBA DE LA PARTE DEMANDANTE DENTRO DEL PROCESO No.2019-0077”*** elaborado por la Ingeniera Civil María del Pilar Gómez Valencia y la Geóloga Diana Teresa Valencia Largo /Exp Dig – Índice 00022 – Archivo 023 - fl. 6 a 20/:

En cuanto a las características de la vía y la franja que colapsó, señalaron:

(...)

La zona de influencia se encuentra en el Norte del Departamento de Caldas en la vía de primer orden Salamina-Pacora-Aguadas referenciada con código 3302 según la Resolución No.005134 del 30 de noviembre de 2016 y a una altitud de 2076 m.s.n.m, en la vía que conduce de Pácora a Aguadas.

Esta vía hace parte de la red vial terciaria del departamento y comunica dos importantes municipios del norte de caldas, su longitud casi total se encuentra pavimentada en estado transitable, presentando deterioro en la superficie de rodadura en algunos puntos específicos.

(...)

La zona objeto de estudio presenta una secuencia de rocas metamórficas del complejo Cajamarca, rocas volcánicas y sedimentarias del Complejo Quebradagrande y de la Formación Abejorral y rocas ultramáficas compuestas por gabros y serpentinas de edad cretácica. (Gonzales, 1980). Se encuentra controlada por el sistema tectónico de Romeral que a su vez afecta el piedemonte de la cordillera central en su flanco occidental.

Este sistema estructural está conformado por 3 sistemas de falla subparalelos: la falla Sabanalarga al Oeste; Romeral en la parte central y San Jerónimo en la parte Este, siendo esta misma nombrada como falla de Aránzazu en la zona sur cerca al municipio con el mismo nombre.

(...)

Tal como se menciona en el <INFORME GEOTÉCNICO DE LAS POSIBLES CAUSAS DEL DESLIZAMIENTO UBICADO EN LA VÍA PACORA – AGUADAS, SECTOR “LA BLANQUITA”, la visita fue realizada por los profesionales el 01 de septiembre de 2017, (seis meses después del acontecimiento), por lo cual no se puede afirmar que el informe <se enfoca en el deslizamiento registrado el 21 de marzo en la vía Pacora – Aguadas, sector <la blanquita...=, toda vez que no existe evidencia suficiente para aseverar la ocurrencia de un movimiento en masa únicamente por la inspección visual de los materiales que componen la zona.

(...)

9. Qué parte de la vía colapso.

La parte de la vía que colapso no corresponde a “aproximadamente la mitad” como mencionan los profesionales en su dictamen, pues no se puede hablar de aproximaciones sin enteros, cuando la vía es totalmente medible, y la visita realizada 4 años después por los profesionales del departamento, evidencia que de un ancho de vía de 6.20 m en condiciones normales, el lugar del acontecimiento presenta una pérdida de 0.90 m, lo que no corresponde a aproximadamente la mitad de la vía, pues esta pérdida deja el lugar con un ancho actual de 5.30 m como se observa en la fotografía 3.

11. Indicarán si la vía en el lugar donde se registro el accidente y sectores aledaños ofrece o no seguridad para el tránsito vehicular.

(...)

El lugar del acontecimiento, aunque no presenta condiciones óptimas, pues después del evento presenta un ancho de banca de 5.30 m, este ancho ofrece capacidad suficiente para el paso moderado de vehículos, a velocidades adecuadas y en condiciones de visibilidad pertinentes.

Frente a los factores que pudieron influir en el deslizamiento, indicaron:

“...

A nivel estructural la zona involucrada se encuentra afectada por fallas y lineamientos que ejercen un control estructural. Evidentemente existen cicatrices de procesos antiguos típicos de una zona húmeda montañosa, como también evidencia de reptaciones y erosión por sobre pastoreo, no obstante, la inspección visual de características de la zona, no es determinante para confirmar la ocurrencia de un movimiento en masa (deslizamiento) justo en el momento del acontecimiento el 21 de marzo de 2017.

Si bien, las aguas de infiltración y escorrentía son relevantes en la ocurrencia de un movimiento en masa y aunque la zona sea típicamente conocida por sus altas precipitaciones, no existen fundamentos verídicos para asegurar que la obra encargada del manejo de aguas no cumplió su función, pues no hay evidencia del estado de la misma antes del acontecimiento.

Se realizó un análisis multitemporal de las imágenes disponibles de la zona de estudio a partir de google earth, en 2014 se encuentra una imagen, donde se observa una corona de un deslizamiento en la parte izquierda de la fotografía, pero no existen fotografías posteriores que permitan dilucidar el avance de dicho movimiento en masa. Sin embargo, se observa que la postería usada en el cerco de la finca no está inclinada (Fotografía 2), razón por la cual se asume que la actividad es baja.

Como conclusiones se presentaron las siguientes:

“12. Indicarán cuales son las conclusiones y recomendaciones a las que llegaron una vez finalizado el dictamen.

Frente a las conclusiones y recomendaciones mencionadas en el dictamen, cabe aclarar que el estudio de suelos debió realizarse en los días cercanos al evento, y es necesario y de vital importancia para poder hacer referencia a la capacidad de los materiales de la zona.

Los problemas de inestabilidad de laderas son típicos en nuestro territorio, no obstante, para afirmar la ocurrencia de algún movimiento en masa, deberá existir evidencia suficiente que lo soporte, por otro lado es cierto que la adecuada conducción y disposición de las aguas de escorrentía juega un papel importante en la prevención de eventos como movimientos en masa, pero como ya se mencionó, no hay manera de determinar si la estructura localizada en el lugar estaba o no cumpliendo su función.

Respecto al sitio del acontecimiento, no se le ha realizado ninguna intervención desde el momento de la ocurrencia del accidente, se mantienen las mismas condiciones. Por lo cual se recomienda la realización de una obra de estabilización que mejore las condiciones del tránsito vehicular y las condiciones de seguridad vial.”

En la sustentación del dictamen la ingeniera civil María del Pilar Gómez Valencia, refirió: i) Hizo referencia a su perfil profesional y laboral relacionada con la ingeniería civil; ii) Para realizar el dictamen acudió a una inspección visual del

terreno, se consultó un estudio para la pavimentación de la vía Agudas – Pácora pero sólo para tener en cuenta cómo se había hecho el diseño geométrico. Ello en su calidad de funcionaria de la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Caldas y básicamente para rebatir los argumentos expuestos en un estudio técnico presentado por la contraparte de la demanda; iii) La visita al terreno se realizó 4 años después de ocurrido el accidente, esto es en el año 2021; iv) En el informe se hizo una descripción de la vía; se caracterizó como de primer orden; se describió el estado de la vía como de regular a transitable; se describió el cima típico de la zona y la composición geológica; v) Se verificó que la vía tiene un ancho de 6.20 mts de ancho y que la pérdida de la banca fue de 90 cm, lo que deja un ancho de 5.20 mts de carretera; vi) No existen evidencias que permitan afirmar que la transversal existente en el sitio del deslizamiento no estaba funcionando adecuadamente antes del evento; vii) De acuerdo con fotografías de Google Earth de años anteriores, se encontró que en la corona del talud existían unas cicatrices y ello significa que se trata de un sector susceptible a deslizamiento, sin que ello implique que necesariamente ocurrirá un evento. Los cercos de los predios son un indicativo para determinar si existen movimientos en masa, porque si se presentan tal situación se evidencia en la inclinación que ellos puedan presentar y en ese lugar no existía evidencia de inclinación en los cercos; viii) La vía Aguadas – Pácora es una vía primaria o de primer orden; ix) No sabe por qué existe diferencia entre la medida de la pérdida de la banca presentada en el informe del ingeniero Juan Carlos Giraldo Mejía (1.20 mts) con la tomada en el dictamen elaborado por ella (90 cm); x) La vía desde el momento del accidente de la chiva hasta la visita realizada por ella no había sido reparada.

Así mismo, en la sustentación del dictamen pericial la geóloga Diana Teresa Valencia Largo, sostuvo: i) Dio cuenta de su perfil profesional y laboral relacionado con su desempeño como geóloga; ii) Para realizar el dictamen se efectuó una visita de campo, se recorrió la zona donde les informaron ocurrió el accidente; la visita se realizó años posteriores a la ocurrencia del siniestro; utilizaron igualmente un celular para tomar las fotografías y un gps para la ubicación exacta del sitio; accedieron a imágenes de Google Earth, que son libres y en diferentes momentos del sitio; se hizo medición del terreno con cinta métrica para la toma de datos; se hizo la revisión de dos documentos que no recuerda sus nombres; iii) Se hizo la revisión de la plancha geológica Pácora – Salamina, con esa información se permite tener información geológica, determinar qué tipo de rocas se van a encontrar en el sitio. La plancha geológica explicó es una numeración o terminología que permite dividir el país y establecer la ubicación del sitio; iv) El sector está afectado por una falla geológica denominada Romeral, lo cual hace el sitio de la Blanquita una zona susceptible a movimientos de masa y procesos erosivos; v) La vía tiene un ancho de 6.20 mts de ancho y que la pérdida de la banca fue de 90 cm., lo que deja un ancho de 5.30 mts de carretera; vi) En el sitio se observa una reptación del suelo, cicatrices, árboles inclinados, lo cual deja ver que se encuentra en un proceso erosivo; vii) Previo a la visita realizada, conoció un informe realizado por otros profesionales en relación con el sitio objeto de estudio; viii) No existe la posibilidad de establecer si las obras existentes en el lugar fallaron o no, lo cierto es que no existían previamente quejas de la comunidad; ix) En la Blanquita se había detectado como punto crítico el lugar donde se ubica la escuela y una cancha de fútbol; sin embargo resulta necesario

revisar dentro de la gobernación si el punto del deslizamiento estaba definido como zona crítica. El punto del deslizamiento en relación con la Escuela la Blanquita se ubica a unos 500 mts; x) Para el momento de la visita, las obras de drenaje estaban funcionando, precisando que la transversal había perdido la parte relacionada con el descole, es decir el cabezote.

- Interrogatorio de parte rendido por el señor MARINO LONDOÑO, quien en su versión refirió lo siguiente: i) No conducía el vehículo tipo chiva de placas TAJ 917, que se accidentó el día 21 de marzo de 2017. El vehículo era conducido por su hijo MARINO ANDRÉS LONDOÑO; ii) Al vehículo le caben 55 personas sentadas en la parte interna; iii) Para el momento del accidente se transportaban en la chiva 64 personas; iv) Su hijo como conductor del vehículo le indicó que debido a la presencia de neblina tuvo que detener la marcha del automotor y en ese momento cedió la banca.

- Testimonio rendido por las siguientes personas:

ALEJANDRO ALBERTO HENAO, quien en su testimonio señaló: i) Fue el agente de tránsito encargado de realizar el informe del accidente ocurrido el 21 de marzo de 2017 y en el que estuvo involucrado el vehículo de placas TAJ-917. Describió el estado de la vía al llegar al lugar y las condiciones climáticas; ii) Por su labor como agente de tránsito estuvo patrullando la vía durante los días previos al accidente, señalando que la misma se encontraba en mal estado, con pavimentos fisurados, taponamientos de obras, taponamiento de cunetas, agregando que en el lugar del accidente se estaban haciendo obras; iii) Al explicar la anotación en el informe de la causa del accidente, señala que en el sitio pudo observar el desbordamiento de la banca, ese sector de la vía se desmoronó y se fue al precipicio junto con la chiva. En el sitio se encontraron pedazos de asfalto; iv) De acuerdo con las versiones de las entrevistas realizadas la chiva era ocupada por 40 o 50 pasajeros, pero según el registro del accidente, más o menos recuerda que se transportaban unas 60 personas; v) En sitios próximos al accidente, la vía también presentaba fisuras; vi) En el registro fotográfico elaborado se evidencia la existencia de fisuras o grietas en la parte de la vía que no cedió, esas grietas fueron tapadas para evitar que no se siguiera filtrando el agua y causara un desprendimiento mayor de la vía. Para tapar las grietas utilizaron barro que era lo que tenían como material disponible en el momento, ese trabajo lo realizaron en compañía del personal del cuerpo de bomberos; vii) Las Chivas son un transporte común en el municipio de Aguadas, se utilizan para el transporte de estudiantes, para el transporte de los campesinos y sus productos en las veredas, para el transporte de trabajadores; viii) El sobrecupo en las chivas era un tema muy complicado, cuando llegó a laborar al municipio no habían agentes de tránsito, no se hacían controles, sólo había policía, pero a ellos, no les compete ejercer ese tipo de controles. Precisó que el único que ejercía las labores de agente de tránsito en el municipio, era él; ix) Para el momento de los hechos las autoridades no habían logrado controlar la problemática del sobrecupo.

LUIS ALBERTO MONTOYA NIETO: i) Es técnico profesional en servicios de policía y labora en la Policía Nacional desde hace 14 años; ii) Conoció de la ocurrencia del

accidente de tránsito del 21 de marzo de 2017, en la vía Aguadas – Pácora, en razón a su actividad como integrante de la Policía Nacional. Al llegar al sitio encontró que se había desprendido una parte de la vía, que por allí había rodado un bus tipo escalera, también se encontraron pedazos de pavimento, pantano, barro, partes del vehículo y el vehículo mismo, personas lesionadas y el cuerpo de algunos fallecidos; iii) Según versiones de algunas personas que se transportaban en el bus, en la vía había mucha neblina, el bus paró y de forma intempestiva sintieron que el bus se rodó; iv) La parte de la vía que cedió tenía una extensión aproximada de 10 mts de largo y de 1.20 de ancho; iv) Prestó sus servicios como integrante de la Policía en el municipio de Agudas durante tres años y medio y durante ese periodo pudo observar que las denominadas chivas eran utilizadas por las personas de las veredas para transportarse, además que en algunos eventos la parte superior o techo de los vehículos era usada por los pasajeros; v) Antes de los hechos la vía era transitable, no había ningún tipo de restricción y no había señalización.

JAIME GALLEGOS SALAZAR, quien en su declaración afirmó: i) Se transportaba en la chiva el día del accidente, porque ese era el medio que tomaba siempre para ir a trabajar a la aguacatera; normalmente salían del parque de la Habana del municipio de Aguadas a eso de las 5:00 a.m., pero ese día por la neblina salieron tipo 5:10 a.m.; ii) El conductor de la chiva se llama Marino, él era el que siempre los transportaba; iii) Al llegar al sector denominado la Blanquita, la neblina se puso muy espesa, no se alcanzaba a ver a un metro de distancia, por eso el conductor primero se bajó a limpiar el vidrio del vehículo y luego decidió detener la marcha del mismo al lado derecho de la vía en dirección hacia Pácora y pasado un minuto o minuto y medio sintió que el troque le pega al pavimento y la gente empezó a decir nos rodamos y efectivamente la banca cedió y abajo fueron a dar; iv) Se transportaban aproximadamente 70 personas en la chiva; v) Antes del accidente no habían tenido dificultades en el desplazamiento, solo en ocasiones, ramas, derrumbes, pero nada especial; vi) Una cuadra antes del lugar del accidente, siempre se veía un arroyito que bajaba por la carretera, las cunetas estaban tapadas de barro y piedras, esa agua la veían siempre que se transportaban por la vía; vii) En el momento del accidente viajaba en la segunda banca del bus detrás del conductor; viii) Es común ver que las personas se trasladen como pasajeros en la parte exterior y superior de los vehículos tipo chiva.

UBEIMAR VALENCIA HURTADO, quien en su versión señaló: i) El día 21 de marzo de 2017, se transportaba en la chiva que resultó accidentada, siempre tomaba ese transporte para desplazarse a su lugar de trabajo en la aguacatera. Ese día abordó el bus eso de las 5:10 a.m., aunque normalmente la chiva lo recogía tipo 5:00 a.m.; ii) Le tocó desplazarse en la parte del capote de la chiva porque ya iba llena, en esa misma parte del vehículo estaban ubicadas más o menos unas 25 personas, además en la parte de atrás iban otras personas; iii) La neblina estaba tan espesa que Marino el conductor del vehículo decidió detener su marcha a un lado de la vía y pasado más o menos un minuto sintió un ruido, que la chiva se fue de lado y que la gente empezó a gritar “nos rodamos”; él como iba en la parte del capote salió expulsado del vehículo inmediatamente y al caer quedó inconsciente; iv) Días anteriores por razón de su trabajo transitó por la vía, la cual aparentemente estaba transitable,

aunque en la misma hay presencia de mucho rastrojo que impide la visibilidad; v) Es habitual que las personas se trasladen como pasajeros en la parte exterior y superior en las chivas; vi) Arriba del lugar del accidente existe un nacimiento de agua, que por la falta de mantenimiento hace que el agua corra por la carretera; vii) Como resultó afectado con el accidente ha presentado una demanda para reclamar los perjuicios.

SAMIR ULISES GARCÍA HERRERA, quien declaró lo siguiente: i) El día del accidente de la chiva, se transportaba en ese vehículo; siempre utilizaba ese medio de transporte para desplazarse a su lugar de trabajo en la aguacatera. Ese día abordó el bus a eso de las 5:15 a.m., le tocó ubicarse en el “capacete” porque ya la chiva iba llena; ii) Ese día hacía mucho frío y había neblina. En el sector de la blanquita la neblina se puso muy espesa, por eso el conductor del vehículo decidió bajarse para limpiar el vidrio y más adelante detuvo su marcha y se estacionó a un lado de la vía, pero pasado más o menos un minuto la chiva se rodó hacia la parte de abajo porque se fue la carretera; iii) Las alcantarillas días antes se veían tapadas, por eso el agua rodaba por la carretera, la vía se veía en buen estado, aunque estaba con mucho rastrojo. Aunque días antes no se había presentado afectación de la carretera; iv) Es común que las personas se trasladen como pasajeros en la parte exterior y superior en las chivas.

- MARÍA TERESA OTÁLORA LUNA, quien en su versión refirió: i) Es ingeniera de vías y transporte, con especialización en ingeniería ambiental. Labora desde hace 12 años como profesional especializada en la Unida de Tránsito del Departamento de Caldas, adscrita a la Secretaría de Hacienda; ii) La vía Pácora – Aguadas en del Departamento de Caldas y calificada como secundaria. En tal sentido, el Departamento de Caldas debe velar por el adecuado mantenimiento de la vía y su señalización, garantizando la seguridad vial; iii) No le consta que tipo de señalización vial existía en la carretera que del municipio de Pácora conduce a Agudas para el 21 de marzo de 2017; iv) No le consta que para el 21 de marzo de 2017, la vía Pácora – Aguadas tuviera algún tipo de restricción para determinados vehículos; v) Leyó el plan estratégico de seguridad vial elaborado por la Cooperativa de Transportadores de Aguadas – Cootransaguadas -, allí pudo evidenciar que el mismo es muy básico e insipiente, porque no contiene todos los elementos que se exigen para este tipo de documentos. También presenta el documento algunas inconsistencias, seguramente porque tomaron como modelo el plan estratégico de otra empresa de transporte para elaborar el propio, ello se evidencia por ejemplo en el número de vehículos que integran el parque automotor, el tipo de vehículos con los que presta el servicio y las rutas asignadas; vi) Las empresas que deben adoptar un plan estratégico de seguridad vial, son aquellas que tengan un parque automotor de 10 o más vehículos o aquellas que tengan contratados conductores; vii) El número de pasajeros que puede transportar un vehículo está determinado por el tipo de chasis, carrocería, motor, modelo y marca, lo cual está determinado en la licencia de tránsito del vehículo; viii) No es permitido que los vehículos se movilen con personas fuera del mismo, sentadas en lugares diferentes donde no se garantice su seguridad. En Colombia existen vehículos tipo chivas que están autorizadas para transportar entre 18 y 63 pasajeros, por ello es necesario determinar en cada caso, la

capacidad autorizada para el vehículo en la licencia de tránsito; ix) Sobrepasar la capacidad autorizada de los vehículos afecta la capacidad de maniobrabilidad del mismo; x) El organismo de tránsito de Aguadas es quien tiene jurisdicción en el lugar donde ocurrieron los hechos de la demanda.

Antes de continuar con el estudio del presente asunto, estima el Despacho necesario referirse a la tacha del testimonio rendido por UBEIMAR VALENCIA HURTADO y MARÍA TERESA OTÁLORA LUNA, se sustenta la tacha en el primer caso, en la existencia de una demanda presentada por el testigo por los mismos hechos que acá se debaten y, en el segundo, por la relación laboral existente entre la declarante y el Departamento de Caldas.

Acorde con lo anterior, ha de indicarse que el artículo 211 del Código General del Proceso permite la formulación de tacha de los testigos citados cuando estos se encuentran en circunstancias que puedan afectar su credibilidad o imparcialidad, en razón del parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras causas.

Con fundamento en la norma citada en precedencia, en concordancia con los principios de la sana crítica y libre valoración de la prueba, debe indicarse que si bien el sustento de la tacha en el presente asunto de una parte, es la existencia de una controversia judicial del testigo por los mismos hechos acá debatidos y de otra, por la relación laboral de la declarante con la entidad demandada, considera esta Juzgadora que esa sola situación, no afecta la credibilidad o imparcialidad de sus dichos, ello toda vez que el medio de prueba practicado no puede analizarse aisladamente, sino en armonía con las demás pruebas existentes en el cartulario.

En este sentido, es susceptible de valoración la prueba testimonial llevada a cabo por esta sede judicial, agregando para arribar a tal conclusión, que en el caso del señor UBEIMAR VALENCIA HURTADO presenció de manera directa los hechos planteados tanto en la demanda como en sus contestaciones y, en el evento de la señora MARÍA TERESA OTÁLORA LUNA, su cargo le permitió ofrecer respuestas a los interrogantes formulados por las partes, entre ellos, a los expuestos por quien formula la tacha. En síntesis, aquellos están llamados a presentar los hechos que les consta, cada uno desde sus diferentes condiciones.

Para el Despacho, el material probatorio relacionado permite demostrar lo siguiente: **i)** El día 21 de marzo de 2017, aproximadamente a las 05:20 horas, en la vía que conduce del Municipio de Aguadas al Municipio de Pácora, concretamente en el sector de la Vereda la Blanquita, el vehículo de servicio público tipo bus escalera, afiliado a la empresa Cootransaguadas, Modelo 1960, de placa TAJ-917, en el cual se transportaban como pasajeros los señores RUBIEL DE JESÚS CANDAMIL, PAULA YULIANA QUINTERO OSORIO, LUZ DARY FRANCO ORREGO y MÓNICA VIVIANA GALLEGO GALLEGO, cayó y rodó de manera intempestiva por una ladera, dejando como saldo la muerte de algunas personas, varios lesionados y el vehículo afectado; **ii)** La vía en donde se presentó el siniestro es una vía secundaria,

que hace parte de la red vial del Departamento de Caldas y por ello el mantenimiento y señalización se encuentran a cargo del citado ente territorial; **iii)** La vía y más exactamente en el lugar del accidente de tránsito en el que resultaron fallecidos los señores RUBIEL DE JESÚS CANDAMIL, LUZ DARY FRANCO ORREGO y MÓNICA VIVIANA GALLEGO GALLEGO, lesionada la señora PAULA YULIANA QUINTERO OSORIO y afectado el vehículo de propiedad del señor MARINO LONDOÑO, fue descrita en el informe de accidente de tránsito como una vía recta, doble sentido; una calzada; dos carriles; con superficie en asfalto; fisurada; húmeda; sin iluminación artificial; sin controles de tránsito, sin señales verticales, sin señales horizontales y sin demarcación vial, al tiempo que se consignó como condiciones climáticas lluvia y presencia de neblina; **iv)** El Departamento de Caldas como encargado del mantenimiento vial de la carretera que conduce del Municipio de Aguadas al Municipio de Pácora realizó obras de rehabilitación, pavimentación y repavimentación en el año 2005 y luego en el año 2011, la vía fue intervenida nuevamente con obras de rehabilitación; **v)** Desde el año 2015, diferentes autoridades locales del municipio de Aguadas pusieron en conocimiento del Departamento de Caldas el mal estado de la carretera que conecta al Municipio de Aguadas con el Municipio de Pácora, al tiempo que advirtieron de los riesgos que presentaba la misma y la posibilidad que esas localidades quedaran incomunicadas; **vi)** De acuerdo con el dictamen pericial rendido por el Ingeniero Juan Carlos Giraldo Mejía, ***“En el sitio del accidente la vía presenta un tramo recto con suficiente visibilidad con taludes superior e inferior de fuerte pendiente donde se observan vestigios de procesos erosivos de diferentes edades;*** **vii)** En el informe del accidente de tránsito se registró como causa probable el *“DESPRENDIMIENTO DE LA BANCA”* .

En este punto se recuerda que el Código Nacional de Tránsito, define el croquis como el *“Plano descriptivo de los pormenores de un accidente de tránsito donde resulten daños a personas, vehículos, inmuebles, muebles o animales, levantado en el sitio de los hechos por el agente, la policía de tránsito o por la autoridad competente”*.

Así mismo, debe anotarse que la Resolución No 111268 del 7 de diciembre de 2012, en sus artículos 1 y 2 dispuso:

***“ARTÍCULO 1o. OBJETO.** La presente resolución tiene por objeto adoptar el nuevo formato del Informe Policial de Accidentes de Tránsito (IPAT) y su Manual de Diligenciamiento, facultar a los Alcaldes de los Municipios que no cuentan con Organismo de Tránsito municipal ni departamental, para que reporten la información de los accidentes de tránsito de su jurisdicción al RNAT y establecer el procedimiento para tal efecto.*

***ARTÍCULO 2o. FORMATO.** A partir de la expedición del presente acto administrativo, el IPAT podrá elaborarse en medios físicos y/o electrónicos, el formato elaborado en medios físicos no podrá diligenciarse en fotocopias, ni modificarse bajo ninguna circunstancia y deberá elaborarse en el formato adjunto, conforme a las siguientes características:*

-- Tamaño del papel: 21.59 cm x 34.29 cm (oficio).

- Tipo de papel: Químico con reactivo negro.
- Tipo de letra: Anal de 6 a 8 picas.
- Colores del papel: Original y copias en blanco.
- Escudo y logos: A la derecha el logo del Ministerio de Transporte y a la izquierda el escudo o logo de la Alcaldía, del Organismo de Tránsito o de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, según corresponda, los cuales tendrán un tamaño de 14,3 x 11,3 milímetros.
- Para las Alcaldías y Organismos de Tránsito, cada IPAT constará de un original y tres copias, para la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional de un original y cuatro copias."

Y en el manual de Diligenciamiento del Informe Policial de Accidente de Tránsito, adoptado a través de la Resolución No 111268 de 2012, vigente para la época de los hechos, se estableció lo siguiente:

"(...)

TABLA 3 HIPÓTESIS DE LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO

3.4. DE LA VÍA

DE LA VÍA

CÓDIGO	HIPÓTESIS	DESCRIPCIÓN
301	Ausencia total o parcial de señales.	Ausencia total cuando no existe ninguna. Ausencia parcial cuando existe alguna de ellas o sin adecuado mantenimiento. Se aplica para el sitio del accidente.
302	Ausencia o deficiencia en demarcación.	Ausencia cuando no existe demarcación. Deficiencia cuando se encuentra borrosa o existe parte de ella. Se aplica para el sitio del accidente.
303	Superficie lisa.	Cuando sobre la vía se encuentra aceite, barro o similares que la hagan resbalosa.
304	Superficie húmeda.	Cuando la vía o parte de ella se encuentra mojada
305	Obstáculos en la vía.	Derrumbes y obras de construcción sin señales. No confundir con dejar obstáculos en la vía.
306	Huecos.	Cuando la calzada tenga huecos que alteren la velocidad o dirección de los vehículos.
307	Dejar o movilizar se- movientes en la vía.	Soltar o movilizar semovientes por las vías públicas sin vigilancia o la seguridad adecuada.

De esta manera, independientemente si el vehículo de servicio público, tipo bus escalera, de placa TAJ-917, se precipitó por la ladera mientras estaba transitando o si una vez detuvo su marcha cedió la banca causando su caída, únicos escenarios posibles, no existe duda que falló el servicio a cargo del Departamento de Caldas, al permitir y disponer el carretable al servicio de la ciudadanía en evidentes condiciones de peligro para todos los usuarios, como lo indicaron diferentes autoridades municipales de Aguadas, sin advertir dichos riesgos y sin desplegar ninguna actividad constructiva o de ingeniería para minimizar los peligros.

Ahora bien, el **Departamento de Caldas** sostuvo dentro de los argumentos de defensa, que el accidente desafortunado en el que perdieron la vida los señores RUBIEL DE JESÚS CANDAMIL, LUZ DARY FRANCO ORREGO y MÓNICA VIVIANA GALLEGO GALLEGO, lesionada la señora PAULA YULIANA QUINTERO OSORIO y afectado el vehículo de propiedad del señor MARINO LONDOÑO, ocurrió por el actuar imprudente o irresponsable del conductor del bus de servicio público de placas TAJ-917, ya que no debió emprender el viaje dadas las condiciones climáticas de neblina y lluvia, además por el sobrecupo del automotor. De esta manera, resulta necesario indagar si el hecho del conductor del bus de servicio público colectivo de pasajeros resultó determinante del resultado lesivo.

El hecho de un tercero puede constituir en todo o en parte una causal exonerativa de responsabilidad de la entidad demandada. De acuerdo con el máximo órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa administrativa, el hecho de un tercero exonera de responsabilidad a la administración, siempre y cuando se demuestre que el tercero es completamente ajeno al servicio, y que su actuación no vincula de manera alguna a este último, produciéndose claramente la ruptura del nexo causal⁹. Así mismo, es indispensable que pueda tenerse como causa exclusiva del daño, producida en tales circunstancias que sea imprevisible e irresistible para que reúna las características de una causa extraña, ajena a la conducta de quien produjo el daño¹⁰.

Expuesto lo anterior, resulta oportuno señalar que la conducción de vehículos implica para quien la desarrolla una actividad peligrosa, pues origina un riesgo de naturaleza anormal, por ello a los conductores les corresponde como obligación atender y respetar las normas de tránsito.

En el presente caso, para el Despacho está demostrado que el bus de servicio público, tipo escalera, de placas TAJ-917, transitaba por la vía que del Municipio de Aguadas conduce al Municipio de Pácora, por el sector de la Vereda la Blanquita, pero además que allí la carretera no contaba con ningún tipo de señalización preventiva o reglamentaria y tampoco tenía demarcación; situación que dadas las condiciones climáticas referidas precisamente por la entidad demandada, colocaban a los

⁹ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de julio de 1989, expediente: 2.852.

¹⁰ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de agosto de 1989, expediente: 5.693

usuario del carretable en evidentes condiciones de inseguridad y peligro. De tal manera que no puede excusar la administración su conducta reprochable de omisión de sus deberes, en la decisión del conductor de desplazarse por la vía, sobre todo cuando la autoridad no tenía dispuesta ninguna restricción o control sobre la carretera.

De otra parte, frente al sobrecupo del automotor, ello pudo haber generado una infracción a las normas de tránsito, pero no existe prueba alguna en el plenario que permita arribar a la conclusión que tal circunstancia fue la causa exclusiva y eficiente del siniestro.

Y finalmente se reitera que en el informe del accidente de tránsito se consignó como causa probable del mismo **“DESPRENDIMIENTO DE LA BANCA”**, circunstancia que fue reafirmada por los ingenieros civiles que rindieron concepto tanto por la parte demandante como por el lado de la demandada Gobernación de Caldas.

En consonancia con lo expuesto, no se logró demostrar por parte del Departamento de Caldas el hecho, de un tercero o la culpa exclusiva de la víctima como razón del accidente que nos ocupa, y como tal, tampoco fortalece la expuesta causal exonerativa de responsabilidad.

Demostrada la responsabilidad del Estado en los términos anteriormente descritos, procede el Despacho a realizar el análisis de la procedencia de la liquidación de perjuicios solicitados en la demanda.

4. PERJUICIOS INMATERIALES:

Debe precisarse que el Consejo de Estado, a través de documento fechado 28 de agosto de 2014¹¹, estableció los referentes para la reparación de perjuicios

¹¹ El referido documento se fundamenta en las siguientes providencias: Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp. 26.251, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Actor: Ana Rita Alarcón Vda. de Gutiérrez y otros. Demandado: Municipio de Pereira; Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp. 27709, M.P. Carlos Alberto Zambrano; Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp. 32988, M.P. Ramiro Pazos Guerrero; Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp. 31172, M.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz; Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp. 36149, M.P. Hernán Andrade Rincón (E). Actor: José Delgado Sanguino y otros. Demandada: La Nación – Rama Judicial; Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp. 26.251, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Actor: Ana Rita Alarcón Vda. de Gutiérrez y otros. Demandado: Municipio de Pereira; Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp. 28804, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo. Actor: Amparo de Jesús Ramírez Suárez. Demandado: Hospital San Vicente de Paúl de Lorica y otro; Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp. 32988, M.P. Ramiro Pazos Guerrero; Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp. 31170, M.P. Enrique Gil Botero. Actor: Luis Ferney Isaza Córdoba y otros. Demandada: La Nación, Ministerio de Defensa – Ejército Nacional; Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp. 28832, M.P. Danilo Rojas Betancourth. Actor: Andreas Erich Sholten Demandado: Nación-Ministerio de Justicia y del Derecho-Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC; Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp. 28804, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo. Actor: Amparo de Jesús Ramírez Suárez. Demandado: Hospital San Vicente de Paúl de Lorica y otro; Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp. 31172, M.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.

inmateriales, destacándose lo siguiente frente a la tipología del perjuicio inmaterial y la reparación del daño moral en caso de lesiones personales:

“De conformidad con la evolución de la jurisprudencia, la Sección Tercera del Consejo de Estado reconoce tres tipos de perjuicios inmateriales:

- i) Perjuicio moral;*
- ii) Daños a bienes constitucionales y convencionales.*
- iii) Daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico), derivado de una lesión corporal o psicofísica.*

Perjuicio moral

Se deprecia en la demanda, indemnización de perjuicios morales para las siguientes personas:

Primer grupo familiar: MARÍA RUBIA CANDAMIL DE CANDAMIL; FERNANDO DE JESÚS CANDAMIL CANDAMIL; SILVIO DE JESÚS CANDAMIL CANDAMIL. Por la muerte del señor RUBIEL DE JESÚS CANDAMIL CANDAMIL - FALLECIDO

Segundo grupo familiar: PAULA YULIANA QUINTERO OSORIO; EMMANUEL QUINTERO OSORIO; GUILLERMO QUINTERO SALAZAR, GLORIA ELSY OSORIO JARAMILLO; MARCO ANTONIO QUINTERO OSORIO y JUAN DAVID QUINTERO OSORIO. Por las lesiones sufridas por la señora PAULA YULIANA QUINTERO OSORIO.

Tercer grupo familiar: NICANOR FRANCO FRANCO; ESTRELLA ORREGO DE FRANCO; RUBEN DARÍO FRANCO ORREGO y AMPARO FRANCO ORREGO. Por el fallecimiento de LUZ DARY FRANCO ORREGO.

Cuarto grupo familiar: JESÚS MARÍA GALLEGO LOAIZA; GILMA GALLEGO LOAIZA; VERÓNICA GALLEGO GALLEGO; JUAN CAMILO GALLEGO GALLEGO; CLAUDIA PATRICIA GALLEGO GALLEGO; YAMID GALLEGO GALLEGO; EGIDIO GALLEGO GALLEGO; CARLOS ALBERTO GALLEGO GALLEGO; NATALIA ANDREA GALLEGO GALLEGO; DEISY LILIANA GALLEGO GALLEGO; GLADYS GALLEGO GALLEGO; NORBEY GALLEGO GALLEGO; ALBANY GALLEGO GALLEGO; SANDRA YANETH GALLEGO GALLEGO; OTILIA LOAIZA ÁLVAREZ y JUAN JOSÉ GALLEGO GIRALDO. Por el fallecimiento de MÓNICA VIVIANA GALLEGO GALLEGO.

El Consejo de Estado en la compilación de providencias aludida, refirió frente al perjuicio moral y la reparación del mismo en casos de lesiones personales lo que a continuación puede leerse:

“2. PERJUICIO MORAL

El concepto se encuentra compuesto por el dolor, la aflicción y en general los sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra, etc., que invaden a la víctima directa o indirecta de un daño antijurídico, individual o colectivo.

(...)

2.2 REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL EN CASO DE LESIONES PERSONALES

La reparación del daño moral en caso de lesiones tiene su fundamento en el dolor o padecimiento que se causa a la víctima directa, familiares y demás personas allegadas.

Para el efecto se fija como referente en la liquidación del perjuicio moral, en los eventos de lesiones, la valoración de la gravedad o levedad de la lesión reportada por la víctima. Su manejo se ha dividido en seis (6) rangos:

REPARACION DEL DAÑO MORAL EN CASO DE LESIONES					
	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 5
GRAVEDAD DE LA LESIÓN	Víctima directa y relaciones afectivas conyugales y paterno-filiales	Relación afectiva del 2º de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos)	Relación afectiva del 3º de consanguinidad o civil	Relación afectiva del 4º de consanguinidad o civil.	Relaciones afectivas no familiares - terceros damnificados
	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.
Igual o superior al 50%	100	50	35	25	15
Igual o superior al 40% e inferior al 50%	80	40	28	20	12
Igual o superior al 30% e inferior al 40%	60	30	21	15	9
Igual o superior al 20% e inferior al 30%	40	20	14	10	6
Igual o superior al 10% e inferior al 20%	20	10	7	5	3
Igual o superior al 1% e inferior al 10%	10	5	3,5	2,5	1,5

Deberá verificarse la gravedad o levedad de la lesión causada a la víctima directa, la que determinará el monto indemnizatorio en salarios mínimos. Para las víctimas indirectas se asignará un porcentaje de acuerdo con el nivel de relación en que éstas se hallen respecto del lesionado, conforme al cuadro.

La gravedad o levedad de la lesión y los correspondientes niveles se determinarán y motivarán de conformidad con lo probado en el proceso.

Nivel No. 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno-filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. Grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes). Tendrán derecho al reconocimiento de 100 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 80 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 60 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 40 SMLMV si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 20 SMLMV cuando la gravedad de

la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 10 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior a 1% e inferior al 10%.

(...)”

Frente al reconocimiento de perjuicios morales, el Consejo de Estado¹² ha expresado: “(...) *En relación con el perjuicio moral ha reiterado la Sala que la indemnización que se reconoce a quienes sufran un daño antijurídico tiene una función básicamente satisfactoria y no reparatoria del daño causado y que los medios de prueba que para el efecto se alleguen al proceso pueden demostrar su existencia pero no una medida patrimonial exacta frente al dolor, por lo tanto, corresponde al juez tasar discrecionalmente la cuantía de su reparación, teniendo en cuenta la gravedad del daño causado al demandante. La magnitud del dolor puede ser apreciada por sus manifestaciones externas y por esto se admite para su demostración cualquier tipo de prueba (...)*”.

Y en relación con el reconocimiento de perjuicios morales, en el evento del fallecimiento de una persona se pronunció el Consejo de Estado¹³ de la siguiente manera:

“...debe advertir la Sala que cuando se ha tratado el tema de la prueba de la existencia de los perjuicios morales en los parientes de la víctima directa en casos de muerte y lesiones graves, esta Corporación ha considerado que el hecho de que esté acreditado el parentesco representa un indicio para la configuración de ese daño en los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil, esto es, respecto de los padres, hermanos, abuelos e hijos del afectado y de su cónyuge o compañera permanente. Las razones que sustentan el paso del hecho indicador del parentesco, a la circunstancia de que el daño causado a una persona afecta moralmente a sus parientes, se fundamentan en que: a) la experiencia humana y las relaciones sociales enseñan que entre los parientes existen vínculos de afecto y ayuda mutua y b) las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes (artículo 42 de la C.P.). De esta manera, la pérdida o enfermedad de uno de los parientes causa un grave dolor a los demás.”

Resulta pertinente referir que el Consejo de Estado - Pleno de la Sección Tercera, en la ya referida sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014¹⁴, fijó los criterios para la reparación de los perjuicios inmateriales, y en lo relacionado con la reparación del daño moral en caso de muerte, diseñó cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia en calidad de

¹² Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Consejera Ponente: Dra. Ruth Stella Correa Palacio. Radicación: 25000-23-26-000-1994-01574-01(15247)DM Actor: Javier Rojas Rivero y Otros. Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional. Sentencia del 20 de abril de 2005.

¹³ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del veintiséis (26) de noviembre de dos mil catorce (2014). Consejero ponente HERNAN ANDRADE RINCÓN .Radicación número: 76001-23-31-000-2000-02819-01(28716)

¹⁴ Radicación 50001-23-15-000-1999-00326-01(31172), C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz.

perjudicados o víctimas indirectas, tal y como se enseña en la tabla que se presenta a continuación:

REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL EN CASO DE MUERTE					
REGLA GENERAL					
	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 5
	Relaciones afectivas conyugales y paterno filiales	Relación afectiva del 2° de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos)	Relación afectiva del 3° de consanguinidad o civil	Relación afectiva del 4° de consanguinidad o civil	Relaciones afectivas no familiares - terceros damnificados
Porcentaje	100%	50%	35%	25%	15%
Equivalencia en salarios mínimos	100	50	35	25	15

En el presente asunto, de conformidad con el material probatorio obrante en el proceso, se puede establecer:

➤ **Primer grupo familiar:** El parentesco del señor RUBIEL DE JESÚS CANDAMIL CANDAMIL – Fallecido -, con MARÍA RUBIA CANDAMIL DE CANDAMIL (madre); FERNANDO DE JESÚS CANDAMIL CANDAMIL (hermano) y SILVIO DE JESÚS CANDAMIL CANDAMIL (hermano), se encuentra demostrado con los registros civiles de nacimiento que fueron aportados con el escrito de demanda /Exp Dig – Índice 00022 – Archivo 003 - fls. 2 a 7/, y con ello el perjuicio moral, en cuanto respecto de éstos se presume el padecimiento sufrido por la muerte del señor RUBIEL DE JESÚS CANDAMIL CANDAMIL.

Beneficiario	Parentesco	Salarios Mínimos Mensuales	Valor a 2024
MARÍA RUBIA CANDAMIL DE CANDAMIL	Madre	100	\$130.000.000
FERNANDO DE JESÚS CANDAMIL CANDAMIL	Hermano	50	\$65.000.000
SILVIO DE JESÚS CANDAMIL CANDAMIL	Hermano	50	\$65.000.000
Total			\$260.000.000

➤ **Tercer grupo familiar:** El parentesco de la señora LUZ DARY FRANCO ORREGO – Fallecida -, con ESTRELLA ORREGO DE FRANCO (abuela); se encuentra demostrado con los registros civiles de nacimiento que fueron aportados con el escrito de demanda /Exp Dig – Índice 00022 – Archivo 003 - fls. 79 a 82/, y con ello el perjuicio moral, teniendo en cuenta que frente a ésta se presume el padecimiento sufrido por la muerte de la señora FRANCO ORREGO.

En cuanto al parentesco de la víctima directa con el señor NICANOR FRANCO FRANCO, se debe indicar que se encuentra demostrado que la señora EDILMA FRANCO ORREGO, es la madre de LUZ DARY FRANCO ORREGO /Exp Dig – Índice 00022 – Archivo 003 - fls. 79/, así mismo que, la primera de las mencionadas es hija de los señores ESTRELLA ORREGO GÓMEZ y SAMUEL FRANCO FRANCO ORREGO /Exp Dig – Índice 00022 – Archivo 003 - fls. 79/, debiéndose afirmar que, según el registro civil de nacimiento el padre se identifica con la cédula de ciudadanía No 4.333.798.

Así las cosas, frente al señor NICANOR FRANCO FRANCO, quien acude al proceso invocando la condición de abuelo-padre de la víctima directa, encuentra el despacho que en el registro civil de nacimiento de la señora EDILMA FRANCO ORREGO, aportado al plenario, existe una disparidad en el nombre de quien se presenta como padre de aquella, situación que permitiría acoger la tesis expuesta por parte el apoderado del Departamento de Caldas, en el sentido de no estar acreditado su vínculo de consanguinidad con la señora LUZ DARY FRANCO ORREGO y por ende la falta de legitimación por activa.

Sin embargo, el Despacho no puede ignorar la postura adoptada por la Corte Constitucional en sentencia T-113 de 2019, la cual este Despacho comparte plenamente, en relación con la prueba del parentesco y la legitimación en la causa dentro del medio de control de reparación directa, así como el exceso ritual manifiesto en los procesos judiciales, cuyo contenido se comparte a continuación:

“

(...)

Metodología de la prueba del parentesco en los procesos de reparación directa.

(...)

28. El estado civil es un atributo de la personalidad, determina la situación de una persona en la familia y en la sociedad y de él se derivan derechos y obligaciones. El artículo 50 de la Constitución de 1886 estableció que el estado civil sería regulado por el Legislador. En cumplimiento de ese mandato constitucional, el artículo 22 de la Ley 57 de 1887 “sobre adopción de Códigos y unificación de la legislación Nacional”, estableció como pruebas principales del estado civil de nacimientos, matrimonios o defunciones de personas bautizadas, casadas, o muertas en el seno de la iglesia, católica, las certificaciones que con las formalidades legales expedieran los respectivos sacerdotes párrocos, insertando las actas o partidas existentes en los libros parroquiales.

Luego, la Ley 92 de 1938 determinó que los documentos referidos eran supletorios y sólo tendrían el carácter de pruebas principales del estado civil respecto de los nacimientos, matrimonios, defunciones, reconocimientos y adopciones, efectuados con posterioridad a la vigencia de la norma, las copias auténticas de las partidas del registro del estado civil, expedidas por los notarios, el alcalde municipal, los funcionarios

consulares de Colombia en el exterior y los corregidores e inspectores de policía, quienes quedaron encargados de llevar el registro del estado civil de las personas.

Finalmente, el Decreto Ley 1260 de 1970 estableció como prueba única del estado civil para los nacimientos, matrimonios y defunciones ocurridos después de su vigencia, las copias auténticas de los registros civiles.

Así las cosas, dependiendo de la fecha de nacimiento de las personas, la prueba del estado civil y la acreditación del parentesco deberá hacerse con el documento que corresponda, según la norma vigente al momento del nacimiento.

Sobre este tema, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia del 22 de enero de 2008, señaló que “(...) cuando el estado civil se aduce como fuente de derechos y de obligaciones (artículo 1° Decreto 1260 de 1970) es necesario acudir a su régimen probatorio establecido en los artículos 101 y siguientes del Decreto 1260 de 1970”^[60]. Con fundamento en lo anterior es posible concluir que el registro civil de nacimiento constituye el medio idóneo para acreditar la relación de parentesco, comoquiera que la información consignada en dicho documento público ha sido previamente suministrada por las personas autorizadas y con el procedimiento establecido para tal efecto.

En síntesis, la legitimación para reclamar los perjuicios derivados de la muerte, en principio, depende de la prueba del parentesco. Así pues, en los procesos de reparación directa el registro civil de nacimiento es un requisito necesario para la acreditación del parentesco, circunstancia que permite inferir el dolor, la aflicción y el sufrimiento de quien solicita la reparación por daño moral.

29. Ahora bien, aunque es claro que el Consejo de Estado ha establecido que los registros civiles de nacimiento, matrimonio y defunción son los medios idóneos para probar el parentesco y el fallecimiento de las personas, en ocasiones la Sección Tercera ha estudiado demandas en las que los accionantes no aportan esa prueba capaz de demostrar el Estado Civil.

*30. Por ejemplo, en **sentencia del 25 de febrero de 2009**^[61], la Sección Tercera del Consejo de Estado estudió la demanda de reparación directa presentada por una mujer y sus hijos contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, con ocasión de la muerte de su cónyuge. La actora consideraba que la institución demandada había omitido el deber de proteger a su esposo, quien como subdirector de un establecimiento carcelario había recibido amenazas de muerte y finalmente fue asesinado.*

En esa ocasión, la demandante aportó todos los registros civiles de nacimiento, pero omitió allegar el registro civil de matrimonio. Al analizar el daño sufrido, la Sección Tercera estimó que a pesar de que la accionante “(...)no acreditó la condición de cónyuge de la víctima, pues no aportó la prueba idónea, esto es, el registro civil de matrimonio, sino que sólo se aportó la partida eclesiástica de matrimonio (...) la cual no tiene la virtualidad de demostrar el vínculo marital, demostró su condición de tercero damnificado en el proceso, por cuanto este documento constituye un indicio de

la relación existente entre quienes figuran en la partida eclesiástica como contrayentes, indicio que unido al hecho de que la demandante era la madre de los hijos de la víctima, conforme se acredita con los registros civiles de nacimiento de Carlos Arturo Álvarez León, William Ernesto Álvarez León, Adolfo Álvarez León y Cesar Augusto Álvarez León (fls. 4 a 7 C. 1), genera en la Sala la certeza de la existencia de la condición de tercero damnificado de la señora (...).

31. De otra parte, en **sentencia del 22 de marzo de 2012**, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado^[62] estudió la demanda presentada por los familiares de una mujer que falleció como consecuencia de un proyectil de arma de fuego en un enfrentamiento armado entre un grupo guerrillero y el Ejército Nacional. En ese caso no reposaba en el proceso ni podía aportarse copia del registro civil de defunción que demostrara la muerte de la víctima.

La Sala Plena de la Sección Tercera indicó que “(...) dado el carácter solemne que reviste la prueba del estado civil, la ausencia de este documento, en principio, **puede y debe suplirse ejerciendo la facultad de decretar pruebas de oficio**, ya que es deber del juez verificar los hechos alegados por las partes (C.P.C., artículo 37). Sin embargo, es evidente que en este caso concreto, cualquier esfuerzo realizado con el fin de que el registro civil de defunción se allegara al proceso, hubiera resultado infructuoso y estéril dado que la muerte de la señora Domicó no está registrada y no puede registrarse si no media una autorización judicial.” (Negrillas fuera del texto)

Entonces, la Sala estableció que la exigencia del registro civil de defunción afectaba gravemente el derecho de los demandantes a acceder a la administración de justicia con el fin de ser indemnizados con ocasión del daño causado porque, aunque se trataba de un documento imprescindible para adoptar una decisión de fondo, no podía ser aportado al proceso por los demandantes “(...) por la potísima razón de que no existe, y su ausencia tampoco puede ser subsanada por el juez contencioso apelando a las facultades oficiosas que la ley procesal le atribuye en materia probatoria.”

Así pues, la Sala advirtió que existían otros elementos probatorios, distintos al registro civil de defunción, que acreditaban plenamente el fallecimiento de la víctima. Por lo tanto, dio por probado el hecho dañoso con fundamento en indicios, pues consideró que ignorar su existencia afectaría el derecho al debido proceso de los demandantes, el principio de buena fe y el mandato constitucional de dar prevalencia al derecho sustancial sobre el formal.

32. Del mismo modo, en **sentencia del 12 de noviembre de 2014**^[63], la Sección Tercera –Subsección C– del Consejo de Estado analizó la demanda presentada por un hombre y sus hijos menores de edad, contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, con ocasión de la muerte de su hijo, causada por la incursión efectuada por un grupo guerrillero contra la población de “Bocas de Santinga” en el municipio Olaya Herrera (Nariño).

En aquella ocasión, el demandante había aportado el registro civil de nacimiento de la víctima, en el que constaba que el padre era “José Solís”. Sin embargo, el demandante

se identificaba como “Nieves Solís”. Ante la dificultad para probar el parentesco entre el actor y la víctima, la Sala hizo uso de sus facultades oficiosas y efectuó una inspección judicial al archivo de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Sin embargo, en la diligencia no se pudo probar el parentesco del padre con la víctima.

No obstante lo anterior, la Sala determinó que “(...) quienes no logran probar el vínculo de parentesco mediante el registro civil, enfrentan la dificultad de probar que hacen parte del núcleo familiar directo de la víctima y la especial relación de afecto que mantenían con ella, al punto que el daño antijurídico padecido por la víctima le generaron unos perjuicios, que pueden ser tanto morales como materiales, los cuales serán el objeto de las pretensiones indemnizatorias.” De las declaraciones de vecinos y familiares, esa corporación encontró probada la relación del accionante con la víctima directa, como si se tratara de un hijo de crianza. Así pues, a pesar de que con el ejercicio de sus facultades oficiosas la Subsección C de la Sección Tercera no pudo deducir el parentesco, al valorar las pruebas que obraban en el expediente sí pudo concluir que existía una relación cercana entre el demandante y la víctima.

33. Posteriormente, en **sentencia del 28 de mayo de 2015**^[64], la Sección Tercera – Subsección C- del Consejo de Estado conoció en segunda instancia la demanda de reparación directa presentada por unas personas contra un hospital público, con ocasión de la muerte de un bebé. Los demandantes no aportaron el registro civil de defunción del niño y, en esa medida, no era posible verificar la ocurrencia del hecho dañoso.

En consecuencia, en uso de la facultad oficiosa consagrada en el artículo 169 del CCA, el Consejo de Estado solicitó a la Registraduría Nacional del Estado Civil copia auténtica del registro civil de defunción del menor de edad. Sin embargo, la entidad informó que el registro requerido no existía e, incluso, en ese momento el registro civil de nacimiento estaba vigente.

Así pues, la Subsección concluyó que no existía convicción respecto de la ocurrencia de la muerte, pues a pesar de haber decretado pruebas en uso del poder oficioso que le confiere la ley, y de haber dado cumplimiento al mandato constitucional que “(...)demanda de la judicatura un rol proactivo y volcado hacia la búsqueda de la verdad y de la aplicación y primacía del derecho sustancial sobre el formal”, las partes no acreditaron la muerte del niño ni alegaron la imposibilidad de hacerlo por causas no imputables a ellos.

34. En conclusión, de conformidad con la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, cuando los demandantes no aportan prueba del estado civil a fin de acreditar el parentesco con la víctima en los procesos de reparación directa o el daño causado, el juez: (i) debe hacer uso de sus facultades oficiosas con el fin de solicitar a la Registraduría o a los demandantes que aporten el registro para acreditar la legitimación en la causa por activa (cuando falta el registro civil de nacimiento para probar el parentesco o el registro civil de matrimonio para probar la relación), la existencia del hecho o el hecho dañoso (cuando se requiere el registro civil de defunción para probar la muerte); y (ii) excepcionalmente, ante la imposibilidad de obtener el registro, debe

analizar si existen indicios que permitan dar por probada la situación que se pretende acreditar (como la relación familiar entre las personas o la muerte)."

Y en torno al defecto procedimental en la modalidad de exceso ritual manifiesto, la Corte Constitucional, señaló:

"(...)"

35. La jurisprudencia constitucional^[65] ha caracterizado el defecto procedimental para señalar que este se configura cuando el juzgador viola derechos fundamentales al negar el derecho sustancial^[66], ya sea por no aplicar la norma procesal acorde con el procedimiento de que se trate^[67], o cuando excede la aplicación de formalidades procesales que hacen nugatorio un derecho.^[68]

En esos casos, el funcionario aplica los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y, por esta vía sus actuaciones devienen en una denegación de justicia^[69], causada por la aplicación de disposiciones procesales opuestas a la vigencia de los derechos fundamentales^[70], por la exigencia irreflexiva del cumplimiento de requisitos formales^[71] o por un rigorismo procedimental en la apreciación de las pruebas.^[72] En estas situaciones se presenta una violación de los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

Efectivamente, en relación con el derecho al debido proceso, tal defecto se configura cuando el funcionario judicial se aparta del proceso legalmente establecido, bien porque sigue un proceso distinto al aplicable o porque omite una etapa sustancial de éste. En relación con el derecho de acceso a la administración de justicia, el defecto se produce cuando, por un exceso ritual manifiesto, se ponen trabas al acceso y se viola el principio de prevalencia del derecho sustancial. En otras palabras, el defecto se estructura cuando se convierte a los procedimientos en obstáculos para la eficacia del derecho sustancial.^[73]

La formulación del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto contra providencias judiciales tiene como objetivo resolver la aparente tensión entre el derecho al debido proceso (artículo 29 Superior) y la prevalencia del derecho sustancial (artículo 228). En principio, estos dos mandatos son complementarios, pero en ocasiones la justicia material parecería subordinada a los procedimientos. No obstante, la jurisprudencia de esta Corte ha señalado que las formalidades procedimentales son un medio para la realización de los derechos sustantivos y no fines en sí mismos.^[74]

36. Como puede observarse, tal defecto tiene una estrecha relación con el denominado defecto fáctico, que se refiere a la existencia de problemas de hecho y de apreciación de pruebas que llevan a una conclusión errada al juez. Adicionalmente, tiene conexión con problemas sustanciales vinculados con la aplicación preferente de la Constitución cuando los requisitos y formalidades legales amenazan la vigencia de los derechos constitucionales.^[75]

*En la **sentencia T-1306 de 2001**^[76], la Corte precisó que si el derecho procesal se torna en obstáculo para la efectiva realización de un derecho sustancial reconocido*

expresamente por el juez, éste no puede dar prevalencia a las formas pues haría nugatorio un derecho del cual es titular quien acude a la administración de justicia y desnaturalizaría a su vez las normas procesales cuya clara finalidad es ser medio para la efectiva realización del derecho material. “De lo contrario se estaría incurriendo en una vía de hecho por exceso ritual manifiesto que es aquel que se deriva de un fallo en el cual haya una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las normas procesales convirtiéndose así en una inaplicación de la justicia material.”

En ese sentido, la valoración probatoria no puede negar la realidad que muestran las pruebas, por dar prevalencia a los trámites. En efecto, aun cuando los jueces gozan de libertad para valorar el material probatorio con sujeción a la sana crítica, no pueden llegar al extremo de desconocer la justicia material, pues su deber es dar por probado un hecho o circunstancia cuando de dicho material emerge clara y objetivamente su existencia^[77].

(...)

37. En resumen, el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto es el resultado de una concepción del procedimiento como un obstáculo para el derecho sustancial con la consecuente denegación de justicia. Aunque los jueces gozan de una amplia libertad para valorar el acervo probatorio de conformidad con las reglas de la sana crítica, la justicia material y la prevalencia del derecho sustancial son guías para adelantar este proceso valorativo. En ese sentido, no existen requisitos sacramentales inamovibles en materia probatoria o procesal, pues el juez debe valorar si procede desechar la prueba o decretarla de oficio, según se protejan de mejor manera los derechos fundamentales, de acuerdo con las particularidades de cada caso concreto.”

De esta manera, para el Despacho del conjunto probatorio y de conformidad con el principio de la sana crítica y la libre apreciación de la prueba, se encuentra demostrada la legitimación en la causa y el daño moral del señor NICANOR FRANCO FRANCO, por las siguientes razones: i) En el registro civil de nacimiento de la señora EDILMA FRANCO ORREGO, si bien se indica como nombre del padre a SAMUEL FRANCO FRANCO, el número de identificación que se registró fue 4.333.798, mismo número del documento de identidad que aparece en los registros civiles de AMPARO FRANCO ORREGO y RUBÉN DARÍO FRANCO ORREGO, y en donde se consignó como nombre del progenitor al señor NICANOR FRANCO FRANCO; ii) En el escrito de poder suscrito por el señor NICANOR FRANCO FRANCO y su autenticación se registró como número de identificación 4.333.798; iii) Los testimonios de María Edilma Acevedo y María Soraida Henao Gallego fueron consistentes en afirmar que el señor NICANOR FRANCO FRANCO y la señora ESTRELLA ORREGO, eran los abuelos de LUZ DARY FRANCO ORREGO, sin embargo, ellos en realidad fueron sus padres de crianza, debido a que la madre de aquella la dejó abandonada desde muy temprana edad.

Ahora bien, el parentesco de la señora LUZ DARY FRANCO ORREGO – Fallecida -, con los señores RUBEN DARÍO FRANCO ORREGO (tío) y AMPARO FRANCO

ORREGO (tía); se encuentra demostrado con los registros civiles de nacimiento que fueron aportados con el escrito de demanda /Exp Dig – Índice 00022 – Archivo 003 - fls. 79 a 86/. Pero además se encuentra probado el daño moral con fundamento en las declaraciones rendidas por María Edilma Acevedo y María Soraida Henao Gallego, quienes al unísono dieron cuenta de la crianza conjunta, bajo el mismo techo y en una relación estrecha afectiva, definida como de hermandad entre Luz Dary, Rubén Darío y Amparo Franco.

De esta manera, se fijan los siguientes montos:

Beneficiario	Parentesco	Salarios Mínimos Mensuales	Valor a 2024
NICANOR FRANCO FRANCO	Abuelo - Padre	100	\$130.000.000
ESTRELLA ORREGO DE FRANCO	Abuela - Madre	100	\$130.000.000
RUBÉN DARÍO FRANCO ORREGO	Tío - Hermano	50	\$65.0000.000
AMPARO FRANCO ORREGO	Tía - Hermana	50	\$65.000.000
Total			\$390.000.000

Cuarto grupo familiar: El parentesco de la señora MÓNICA VIVIANA GALLEGO GALLEGO – fallecida – con JESÚS MARÍA GALLEGO LOAIZA (padre); GILMA GALLEGO LOAIZA (madre); VERÓNICA GALLEGO GALLEGO (hermana); JUAN CAMILO GALLEGO GALLEGO (hermano); CLAUDIA PATRICIA GALLEGO GALLEGO (hermana); YAMID GALLEGO GALLEGO (hermano); EGIDIO GALLEGO GALLEGO (hermano); CARLOS ALBERTO GALLEGO GALLEGO (hermano); NATALIA ANDREA GALLEGO GALLEGO (hermana); DEISY LILIANA GALLEGO GALLEGO (hermana); GLADYS GALLEGO GALLEGO (hermana); NORBEY GALLEGO GALLEGO (hermano); ALBANY GALLEGO GALLEGO (hermana); SANDRA YANETH GALLEGO GALLEGO (hermana); OTILIA LOAIZA ÁLVAREZ (abuela) y JUAN JOSÉ GALLEGO GIRALDO (abuelo), se encuentra demostrado con los registros civiles de nacimiento que fueron aportados con el escrito de demanda /Exp Dig – Índice 00022 – Archivo 003 - fls. 90 a 7/, y con ello el perjuicio moral, en cuanto respecto de éstos se presume el padecimiento sufrido por la muerte de la señora MÓNICA VIVIANA GALLEGO GALLEGO.

Aunado a lo anterior, la parte actora reclama el reconocimiento de la transmisibilidad del perjuicio moral en favor de sus herederos, por el daño del que fue víctima al sobrevivir a las lesiones sufridas en el accidente de tránsito del 21 de marzo de 2017 y que le produjo su fallecimiento en 05 de abril de la misma anualidad.

En relación con la transmisibilidad del derecho a la indemnización por perjuicios – morales o materiales – sufridos por la víctima directa del daño, el Consejo de Estado en providencia del 16 de mayo de 2019, sostuvo¹⁵:

2.5. SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS MORALES A FAVOR DE LOS HEREDEROS.

En relación con la reclamación de perjuicios morales por parte de los herederos, la Sala fijó de manera justificada su posición, en sentencia de 10 de septiembre de 1998¹⁶ y la reiteró en sentencia del 3 de agosto de 2017¹⁷.

Se dijo en las sentencias acabadas de citar que en relación con la transmisibilidad mortis causa del derecho a la reparación de los daños morales, cuando su titular fallece sin haber ejercido la acción indemnizatoria, la doctrina se ha dividido entre quienes, por una parte, consideran que, tratándose de un derecho personalísimo íntimamente ligado a la existencia de su titular, no puede transmitirse a sus herederos, porque resultaría inmoral aceptar que ese derecho que deriva del dolor pudiera ser susceptible de actos de disposición y quienes, por otra parte, consideran que ese derecho sí es transmisible, porque la negativa a aceptar la transmisibilidad del derecho a reclamar indemnización por el perjuicio moral confunde el interés jurídico protegido con la consecuencia jurídica que se deriva de su vulneración, lo que se traduce en la configuración de una obligación indemnizatoria idéntica a cualquiera otro crédito que tenga su origen en un daño antijurídico.

La Sala acogió en aquella oportunidad este último criterio, por considerar que el derecho a obtener la reparación de los perjuicios morales es de carácter patrimonial y que, como tal, se puede transmitir a los herederos, habida consideración de que en el ordenamiento jurídico nacional no existe disposición que prohíba dicha transmisión; por el contrario, la regla general es que todos los activos, derechos y acciones de carácter patrimonial forman parte de la masa herencial y, además, el reconocimiento de ese derecho guarda armonía con los principios informadores del ordenamiento jurídico en materia de daño resarcible y, en especial, con las normas constitucionales que establecen el derecho a la indemnización por todos los daños antijurídicos sufridos (art. 90).

En síntesis, el derecho a la indemnización del perjuicio moral se transmite porque se trata de un crédito que puede ser reclamado, bien por su titular o bien por sus sucesores mortis causa, en cuanto continuadores de su personalidad, que ocupan la posición jurídica que ostentaba el causante frente a la totalidad de los derechos y acciones de contenido patrimonial transmitidas por el fallecimiento.

(...)”

¹⁵ Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A; Magistrado Ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera; 16 de mayo de 2019; Radicado No 20001-23-31-000-2009-00209-01(47794); Actor: Elicenia Molina y Otros; Demandado: Rama Judicial.

¹⁶ Expediente 12.009.

¹⁷ Expediente 47.627

Al abordar el caso concreto en la providencia que se ha citado, el Consejo de Estado, señaló:

“(…)

La parte demandante pretende que se declare que la Rama Judicial es responsable de un error judicial cometido por el Tribunal Administrativo de Santander en sentencia del 31 de mayo de 2005, al no reconocerle, como única heredera de la joven María del Rosario Ospino Molina, la transmisibilidad de los perjuicios morales padecidos por esta última durante el tiempo comprendido entre la ocurrencia del daño (trauma craneoencefálico severo y fractura del seno frontal) y su fallecimiento.

La referida sentencia consideró que dichos perjuicios no son transmisibles; sin embargo, de la exposición que se hizo en el capítulo anterior se impone concluir que los herederos sí están legitimados para reclamar la indemnización por perjuicios morales sufridos antes de su fallecimiento por la víctima directa del daño, en tanto que éstos constituyen un crédito que puede ser reclamado por su titular o por sus sucesores mortis causa, como continuadores de su personalidad.

De igual forma, encuentra la Sala que el perjuicio moral sufrido por la señorita María del Rosario Ospino Molina se encuentra debidamente acreditado teniendo en cuenta que es evidente el deterioro grave que sufrió su salud tras el accidente ocasionado en el puente colgante del parque lineal Hurtado en Valledupar, al punto que falleció debido a un trauma craneoencefálico severo y una fractura de seno frontal.

Para la Sala, lo anotado en precedencia es indicativo de que el fallo del 31 de mayo de 2005, proferido por el Tribunal Administrativo de Santander, contiene un error judicial, pues se debió haber reconocido la indemnización que por perjuicios morales habría recibido María del Rosario Ospino Molina, como consecuencia del accidente del que fue víctima, en el entendido de que, si bien los perjuicios morales son personalísimos, lo que le hereda no es el dolor como tal sino el crédito que resulta del acaecimiento del daño, el cual puede ser reclamado por los sucesores mortis causa, dado que éstos pasan a ocupar la posición jurídica que ostentaba el causante.” – Resaltado fuera del texto-

En sub-lite, está demostrado que la señora MÓNICA VIVIANA GALLEGO GALLEGO, resultó lesionada en el accidente de tránsito ocurrido el día 21 de marzo de 2017, además que por cuenta del mismo permaneció hospitalizada hasta el 05 de abril de 2017, fecha última en la que ocurrió su deceso /Exp Dig – Índice 00022 – Archivo 064 – fls 177 a 205/

En consonancia con lo anterior, el Despacho reconocerá el perjuicio reclamado, en cuantía equivalente a cien (100) smlmv, en favor de la masa sucesoral de MÓNICA VIVIANA GALLEGO GALLEGO, monto que el Despacho estima justa, teniendo en cuenta la gravedad de la lesión sufrida, la situación médica a la que se vio sometida y la evidente congoja que esto le produjo.

El perjuicio se reconoce en favor de la masa sucesoral, en atención a que dentro del expediente no reposa prueba alguna que acredite a los señores JESÚS MARÍA GALLEGO LOAIZA y GILMA GALLEGO LOAIZA como los únicos herederos de la víctima directa MÓNICA VIVIANA GALLEGO GALLEGO.

Beneficiario	Parentesco	Salarios Mínimos Mensuales	Valor a 2024
JESÚS MARÍA GALLEGO LOAIZA	Padre	100	\$130.000.000
GILMA GALLEGO LOAIZA	Madre	100	\$130.000.000
MASA SUCESORAL DE MÓNICA VIVIANA GALLEGO GALLEGO		100	\$130.000.000
VERÓNICA GALLEGO GALLEGO	Hermana	50	\$65.0000.000
JUAN CAMILO GALLEGO GALLEGO	Hermano	50	\$65.0000.000
CLAUDIA PATRICIA GALLEGO GALLEGO	Hermana	50	\$65.0000.000
YAMID GALLEGO GALLEGO	Hermano	50	\$65.0000.000
EGIDIO GALLEGO GALLEGO	Hermano	50	\$65.0000.000
CARLOS ALBERTO GALLEGO GALLEGO	Hermano	50	\$65.0000.000
NATALIA ANDREA GALLEGO GALLEGO	Hermana	50	\$65.0000.000
DEISY LILIANA GALLEGO GALLEGO	Hermana	50	\$65.0000.000
GLADYS GALLEGO GALLEGO	Hermana	50	\$65.0000.000
NORBAY GALLEGO GALLEGO	Hermano	50	\$65.0000.000
ALBANY GALLEGO GALLEGO	Hermana	50	\$65.0000.000
SANDRA YANETH GALLEGO GALLEGO	Hermana	50	\$65.0000.000
OTILIA LOAIZA ÁLVAREZ	Abuela	50	\$65.0000.000
JUAN JOSÉ GALLEGO GIRALDO	Abuelo	50	\$65.0000.000
Total			\$1.270.000.000

Segundo grupo familiar: En este caso se recuerda que los perjuicios morales se reclaman en virtud de las lesiones sufridas por la señora PAULA YULIANA QUINTERO OSORIO, en el accidente de tránsito ocurrido el 21 de marzo de 2017, en la vía que de Aguadas conduce a Pácora y en ese contexto se estudiará el perjuicio moral.

En el proceso se encuentran las declaraciones de YUDI SOLANYER CASTAÑO ARIAS y ANGELICA ARIAS VALENCIA, quienes de manera común dan cuenta de

una parte, de las labores de PAULA YULIANA QUINTERO OSORIO en el sector agrícola de manera específica en los cultivos de aguacate y de otra, de la afectación mental o psicológica sufrida por aquella luego del accidente de tránsito. Frente al último punto, concuerdan en señalar que Paula Yuliana presenta episodios de “locura”, pues se desnuda, tiene acciones violentas, refiere que ve “elefantes en bicicletas y monjas volando”.

Así mismo, en el proceso reposa el dictamen de determinación de la pérdida de la capacidad laboral y ocupacional de la señora PAULA YULIANA QUINTERO OSORIO, realizado por el perito Juan Mauricio Cortés López, quien pertenece a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Caldas. En el dictamen pericial se fijó una pérdida de la capacidad laboral en un 34.00%, con fecha de estructuración del 09 de mayo de 2023 y con un origen en accidente de tránsito.

En la sustentación del dictamen el perito expuso lo siguiente: i) Hizo una relación de su experiencia profesional y laboral como médico, dentro de la cual se encuentra su ejercicio en la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Caldas; ii) Para la elaboración del dictamen y la calificación de la invalidez se acudió al contenido del Decreto 1507 de 2014 o manual de calificación de invalidez No 4, la consulta con el paciente, revisión de la historia clínica, conceptos especializados, exámenes de laboratorio, pruebas que se realizan al paciente. Se solicitó una valoración de neuropsicología para determinar si había o no compromiso cognitivo por el accidente sufrido y una valoración por psiquiatría para que determinara el componente mental que la valorada estaba presentando; iii) La paciente desde el punto de vista físico no tenía ninguna alteración, pero sí presentaba una alteración mental tipo estrés postraumático secundario a la situación vivida. La valoración de acuerdo con el análisis de la paciente y lo dispuesto por el manual de calificación arrojó un porcentaje de pérdida de la capacidad laboral en un 34%, con fecha de estructuración de 09 de mayo de 2023, originada en accidente de tránsito.

Así las cosas, en criterio del despacho el perjuicio moral se encuentra demostrado en las siguientes dimensiones y respecto de los siguientes demandantes:

PAULA YULIANA QUINTERO OSORIO (víctima directa): Por lo que en su condición de víctima directa se ubica en el nivel 1 del rango 3 previstos en la tabla de la jurisprudencia de unificación, teniendo como consecuencia el reconocimiento de **sesenta (60) SMLMV**, que, para el presente año, equivalen a **SETENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$78.000.000)**, dado que para 2024 se tiene un salario mínimo mensual de \$1.300.000,00¹⁸.

EMMANUEL QUINTERO OSORIO (hijo); GUILLERMO QUINTERO SALAZAR (padre), GLORIA ELSY OSORIO JARAMILLO (madre); MARCO ANTONIO QUINTERO OSORIO (hermano) y JUAN DAVID QUINTERO OSORIO (hermano): Las relaciones de parentesco están debidamente acreditadas con los respectivos registros civiles de nacimiento /Exp Dig – Índice 00022 – Archivo

¹⁸ Decreto 2292 del 29 de diciembre de 2023

003 - fls. 13 a 20/, que permiten tener como demostrada la relación de cercanía afectiva requerida por la jurisprudencia para el reconocimiento de perjuicios morales.

De igual manera, se recaudó en el proceso el testimonio de YUDI SOLANYER CASTAÑO ARIAS y ANGELICA ARIAS VALENCIA, quienes refirieron que a raíz del accidente sufrido por la señora **PAULA YULIANA QUINTERO OSORIO**, la familia ha comprendido su afectación de salud y sus relaciones con aquella, se enmarcan en el entendimiento, paciencia y comprensión.

Con fundamento en lo anterior se reconoce a EMMANUEL QUINTERO OSORIO (hijo); GUILLERMO QUINTERO SALAZAR (padre), GLORIA ELSY OSORIO JARAMILLO (madre) y de acuerdo con la relación filial lo determinado para el nivel 1 del rango 3 previstos en la tabla de la jurisprudencia de unificación, teniendo como consecuencia el reconocimiento para cada uno **sesenta (60) SMLMV**, que, para el presente año, equivalen a **SETENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$78.000.000)**.

Y para los señores **MARCO ANTONIO QUINTERO OSORIO (hermano)** y **JUAN DAVID QUINTERO OSORIO (hermano)**, se reconoce de acuerdo con la relación filial lo determinado para el nivel 2 del rango 3 previstos en la tabla de la jurisprudencia de unificación, teniendo como consecuencia el reconocimiento para cada uno **treinta (30) SMLMV**, que, para el presente año, equivalen a **TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$39.000.000)**.

Daño a la salud:

En el presente asunto, también se reclama el reconocimiento y pago del daño a la salud para la señora PAULA YULIANA QUINTERO OSORIO, por lo que el Despacho reitera los lineamientos planteados en la sentencia del 28 de agosto de 2014, en la que se unificó la jurisprudencia en relación a la tasación, en los siguientes términos:

“Para la reparación del daño a la salud se reiteran los criterios contenidos en las sentencias de unificación del 14 de septiembre de 2011, exps. 19031 y 38222, proferidas por esta misma Sala, en el sentido de que la regla en materia indemnizatoria, es de 10 a 100 SMMLV, sin embargo, en casos de extrema gravedad y excepcionales se podrá aumentar hasta 400 SMMLV, siempre que esté debidamente motivado.

Lo anterior, con empleo del arbitrio iudice, para lo cual se tendrá en cuenta la gravedad y naturaleza de la lesión padecida, para lo que se emplearán –a modo de parangón– los siguientes parámetros o baremos:

GRAVEDAD DE LA LESIÓN	Víctima
<i>Igual o superior al 50%</i>	<i>100 SMMLV</i>

<i>Igual o superior al 40% e inferior al 50%</i>	80 SMMLV
<i>Igual o superior al 30% e inferior al 40%</i>	60 SMMLV
<i>Igual o superior al 20% e inferior al 30%</i>	40 SMMLV
<i>Igual o superior al 10% e inferior al 20%</i>	20 SMMLV
<i>Igual o superior al 1% e inferior al 10%</i>	10 SMMLV

“

Se reitera que la parte actora logró demostrar el daño a la salud por dos razones a saber: i) El daño a la salud puede catalogarse de excepcional, pues de una parte, la gravedad de la lesión se ubica en el rango tres “igual o superior al 30% e inferior al 40%” de la referida tabla; y ii) La víctima, para la fecha en que ocurrió el accidente, era una mujer de 27 años de edad, que sufrió a raíz del accidente una afectación mental que es descrita en el dictamen pericial *“Paciente con incoherencia al hablar, ideas alucinatorias, movimiento pendular del cuerpo y logorreica.”*

Además, porque se reitera que en los testimonios rendidos por YUDI SOLANYER CASTAÑO ARIAS y ANGELICA ARIAS VALENCIA, de manera común dan cuenta de afectación mental o psicológica sufrida por aquella luego del accidente de tránsito, señalando que Paula Yuliana presenta episodios de *“locura”*, se desnuda, tiene acciones violentas, refiere que ve *“elefantes en bicicletas y monjas volando”*.

Es evidente que en este caso existe un daño que le impide a PAULA YULIANA QUINTERO OSORIO seguir realizando las actividades normales de una mujer de su edad, incluso relacionarse, en la misma forma como lo hacía antes del suceso. La falla le produjo entonces un daño que reviste gravedad excepcional en sus posibilidades de relacionarse con el mundo personal, familiar y social que le era propio.

En consecuencia, el Despacho fija por concepto del daño a la salud a favor de PAULA YULIANA QUINTERO OSORIO el valor de **sesenta (60) SMLMV**, que, para el presente año, equivalen a **SETENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE** (\$78.000.000), dado que para 2024 se tiene un salario mínimo mensual de \$1.300.000,00¹⁹.

5. PERJUICIOS MATERIALES:

Primer grupo familiar: Se reclama para la señora MARÍA RUBIA CANDAMIL DE CANDAMIL el reconocimiento y pago del lucro cesante, relacionado con la pérdida

¹⁹ Decreto 2292 del 29 de diciembre de 2023

de la ayuda económica que venía percibiendo por parte de su hijo, Rubiel de Jesús Candamil Candamil, quien se desempeñaba en oficios varios.

Antes de resolver sobre la procedencia o no del reconocimiento del perjuicio reclamado se advierte que el apoderado del Departamento de Caldas, tachó el testimonio rendido por el señor Rubén Darío Candamil Candamil, argumentando que su posible vínculo de familiaridad con los demandantes le restaba imparcialidad a su versión.

De esta manera, se recuerda que el artículo 211 del Código General del Proceso permite la formulación de tacha de los testigos citados cuando estos se encuentran en circunstancias que puedan afectar su credibilidad o imparcialidad, en razón del parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras causas.

Con fundamento en la norma citada en precedencia, en concordancia con los principios de la sana crítica y libre valoración de la prueba, debe indicarse que si bien el sustento de la tacha en el presente asunto radica en la posible relación de parentesco entre el declarante y los demandantes, considera esta Juzgadora que esa sola situación, no afecta la credibilidad o imparcialidad de sus dichos, ello toda vez que el medio de prueba practicado no puede analizarse aisladamente, sino en armonía con las demás pruebas existentes en el cartulario. Aunado al hecho, que de acuerdo con la experiencia, resulta razonable que personas allegadas o con cierto grado de familiaridad con las víctimas, sean las llamadas a dar cuenta de las relaciones afectivas, de ayuda y apoyo existentes entre aquellos.

Precisado lo anterior, el Despacho señala que no obra en el proceso prueba de los ingresos que devengaba el señor RUBIEL DE JESÚS CANDAMIL por su oficio, pero de acuerdo con las declaraciones rendidas por ANGELA MARÍA OSPINA AGUDELO Y RUBÉN DARÍO CANDAMIL CANDAMIL, se demostró que aquel desempeñaba una actividad productiva al momento de su muerte, de manera particular en labores agrícolas en un cultivo de aguacates. Así mismo, los testigos antes referidos, afirmaron que Rubiel vivía con su madre y hermanos, y que ayudaba económicamente en el hogar.

Acorde con lo anterior, se liquidará el lucro cesante con base en la presunción del salario mínimo legal vigente, esto es, la suma de \$1.300.000, a este monto se le descontará el 25% que la víctima destinaba para su propia manutención (\$325.000), por lo que el ingreso base de liquidación será de \$975.000. No se reconoce valor alguno por concepto de prestaciones sociales, dado que no se demostró la existencia de un vínculo laboral formal, del cual se pueda derivar dicho derecho.

Consolidado: Desde la fecha de la muerte del señor RUBIEL DE JESÚS CANDAMIL -21 de marzo de 2017- hasta la fecha de la presente sentencia - 4 de octubre de 2024-, esto es 90 meses. Ello, teniendo en cuenta que no existe prueba en plenario del fallecimiento de la señora MARÍA RUBIA CANDAMIL.

Lucro Cesante Consolidado
$\frac{975.000 \times \left((1+0,004868)^{90} \right) - 1}{0,004867} = \$109.781.361$

Futuro: La señora MARÍA RUBIA CANDAMIL al momento de la sentencia – 30 de septiembre de 2024 – cuenta con 82 años de edad, y de conformidad con la Resolución N° 1112 del 29 de junio de 2007, expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, mediante la cual adoptó la tabla de mortalidad de los asegurados, una mujer de 82 años tiene una expectativa de vida de 5,17 años (61 meses).

De esta manera el lucro cesante futuro se reconocerá desde la fecha de la sentencia - 4 de octubre de 2024- hasta cuando la demandante cumpla 87 años y un mes de edad -26 de febrero de 2029.

Lucro Cesante Futuro
$\frac{395.000 \times \left((1+0,004868)^{61} \right) - 1}{0,00487 \times \left((1+0,004868)^{61} \right)} = \$20.803.372$

Lucro cesante vencido:	\$109.781.361
Lucro cesante futuro:	\$20.803.372
Total Lucro Cesante	\$130.584.733

Quinto grupo – Marino Londoño:

Se reclama el reconocimiento de perjuicios materiales a favor del señor MARINO LONDOÑO, derivados de la pérdida total del vehículo tipo bus de servicio público, marca Ford, modelo 1960 e identificado con la placa TAJ-917, como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el día 21 de marzo de 2017.

Lo primero que debe indicarse, es que de conformidad con el material probatorio obrante en el expediente, sobre el vehículo identificado con la placa TAJ-917, recaía una limitación a la propiedad por prenda en favor de la Cooperativa de Transportadores de Agudas, situación que claramente no impide el reconocimiento del perjuicio pedido, pues dicha limitación no saca del patrimonio del propietario el automotor, sólo le impone una medida restrictiva frente al traspaso o venta del mismo.

De conformidad con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 769 de 2002 “Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito y Terrestre y se dictan otras disposiciones”, la cancelación de la licencia de tránsito de un automotor se debe realizar por parte de su propietario cuando ocurra **una destrucción total del vehículo, pérdida definitiva**, exportación o reexportación, hurto o desaparición documentada sin que se conozca el paradero final del vehículo²⁰.

La Resolución No 0004775 de 2009, “Por la cual se establece el manual de trámites para el registro o matrícula de vehículos automotores y no automotores en todo el territorio nacional y se dictan otras disposiciones”, define en su artículo 1º los siguientes conceptos:

***Artículo 3º. Definiciones.** Además de las definiciones contenidas en la Ley 769 de 2002, para efectos de la interpretación y aplicación de la presente resolución se tendrán en cuenta las siguientes:*

(...)

***CERTIFICADO DE DESINTEGRACIÓN FÍSICA TOTAL:** Documento expedido por las entidades desintegradoras, en el que se acredita la desintegración física total del vehículo.*

(...)

***DESTRUCCIÓN TOTAL DEL VEHÍCULO:** Entiéndase por destrucción total, cuando en el siniestro un vehículo pierde su capacidad de funcionamiento técnico-mecánico, su chasis sufre un daño tal que técnicamente sea imposible su recuperación y que obliga a la cancelación de su matrícula o registro.*

(...)

***PERDIDA TOTAL DEL VEHÍCULO:** Entiéndase por pérdida total, cuando en el siniestro un vehículo no pierde su capacidad de funcionamiento técnico-mecánico que le impida realizar transacciones comerciales y no obliga a la cancelación de su matrícula o registro.”*

La misma normatividad – Resolución No 0004775 de 2009 – regula de la siguiente manera la cancelación de matrícula de los vehículos automotores:

²⁰ **ARTÍCULO 40. CANCELACIÓN.** La licencia de tránsito de un vehículo se cancelará a solicitud de su titular por destrucción total del vehículo, pérdida definitiva, exportación o reexportación, hurto o desaparición documentada sin que se conozca el paradero final del vehículo, previa comprobación del hecho por parte de la autoridad competente.

En cualquier caso, el organismo de tránsito reportará la novedad al Registro Nacional Automotor mediante decisión debidamente ejecutoriada.

PARÁGRAFO.

En caso de destrucción, debe informarse al Ministerio de Transporte de este hecho para proceder a darlo de baja del registro automotor. En ningún caso podrá matricularse un vehículo nuevamente con esta serie y número.

“Artículo 47. *La matrícula de un vehículo automotor, se cancelará a solicitud de su titular por pérdida definitiva, destrucción total del vehículo automotor, exportación, reexportación, hurto o desaparición documentada. Así mismo los vehículos rematados como chatarra, no podrán ser registrados ante los Organismos de Tránsito.*

Para la cancelación de la matrícula de un vehículo automotor se dará cumplimiento a los requisitos de carácter general previstos en la presente norma y los descritos para cada caso:”

“Artículo 48. *Para la cancelación de la matrícula de un vehículo automotor por destrucción total, a causa de la desaparición en las aguas de un río, en el fondo de un abismo, por desastre de origen natural, por causa de actos terroristas, por motín, sedición o asonada, se cumplirán los requisitos de carácter general previstos en la presente norma, anexando como documentos probatorios del hecho, los siguientes:*

- *Certificación expedida por el Jefe Seccional de la Policía Judicial e Investigación de la Policía Nacional.*
- *Concepto técnico sobre el daño que amerita la declaratoria de la destrucción total emitido por perito de la compañía aseguradora si el vehículo estaba asegurado. En caso contrario por perito nombrado bajo las costas de los propietarios del vehículo automotor, por la autoridad de tránsito o por la autoridad judicial según corresponda.*
- *Para los casos de destrucción total o pérdida definitiva se debe anexar original o copia auténtica del documento que determine que el chasis no puede ser recuperado, o cuando por disposición legal se determine su destrucción.*
- *Original de la Licencia de Tránsito o en caso contrario la declaración por escrito sobre la pérdida del documento.*

Parágrafo. *Una vez cancelada la matrícula por destrucción total de un vehículo automotor, este vehículo no será matriculado nuevamente y la serie de placa (letra y números) asignada no podrá ser utilizada en otro automotor.”*

“Cancelación de la matrícula de un vehículo automotor por destrucción total a causa de un accidente de tránsito

Artículo 50. *Para los casos de cancelación de matrícula por destrucción total a causa de accidente de tránsito, adicional a la copia auténtica del informe de accidente de tránsito emitido por la autoridad que lo atendió, se acreditarán los requisitos de carácter general previstos en la presente norma y los descritos a continuación:*

- *Certificación de la ocurrencia del hecho emitida por el Comandante de la Policía de Carreteras o, en su defecto la expedida por el Comandante del Distrito de la Policía Nacional de la jurisdicción según corresponda.*
- *Certificación técnica de la Sijín o Dijín en la que se detallen las características de identificación del vehículo que sean posibles o de no serlo se exprese tal condición.*
- *Concepto técnico sobre el daño que amerita la declaratoria de la destrucción total emitido por perito de la compañía aseguradora si el vehículo estaba*

asegurado. En caso contrario por perito nombrado bajo las costas de los propietarios del vehículo, por la autoridad de tránsito o por la autoridad judicial según corresponda.

No existe traspaso del vehículo automotor a compañía de seguros, en caso de destrucción total, sin perjuicio de la entrega que le haga el propietario de las partes reutilizables."

En el presente asunto, no existe ninguna prueba técnica pericial realizada por el perito de alguna compañía de seguros, por parte de un perito contratado por el propietario del vehículo de placas TAJ 917 o por uno designado por alguna autoridad de tránsito o judicial, que permita constatar que efectivamente el vehículo referido, sufrió en los términos definidos en la Resolución No 0004775 de 2009, una pérdida o destrucción total.

Se precisa que el dictamen pericial elaborado por la firma Aliar S.A., a través del petito evaluador José Óscar Tamayo Rivera, tuvo como objeto establecer el posible valor comercial del vehículo de placas TAJ 917, más no así el estado de su pérdida o destrucción total. En este dictamen pericial se indicó claramente que para su elaboración se efectuó únicamente el análisis de los documentos del automotor "(Licencia de Tránsito Certificado de tradición del vehículo y otros)" y "estudios de mercado". Aunado al hecho que en la sustentación del dictamen el perito de manera categórica afirmó que el vehículo no había sido objeto de examen, debido a su siniestro, pero sin aportarse algún elemento probatorio que permitiera establecer con certeza la pérdida o destrucción total del automotor.

De esta manera, fue demostrado que en efecto el vehículo de placas TAJ-917, sufrió unos daños en el accidente ocurrido el 21 de marzo de 2017, pero sin que se hubiese determinado la magnitud del daño del mismo, es decir su pérdida total o no.

De tal manera que, en aplicación del artículo 193 CPACA, se condenará en abstracto para que, mediante incidente se liquide este perjuicio, para lo cual se tendrán en cuenta los siguientes parámetros: (i) Deberá elaborarse un dictamen pericial, que permita determinar si el vehículo de placas TAJ-917, sufrió o no pérdida o destrucción total; (ii) El dictamen deberá sujetarse a lo previsto en la Ley 769 de 2002 y la Resolución No 0004775 de 2009; (iii) El dictamen deberá establecer si el vehículo estaba amparado por póliza que cubriera el siniestro por pérdida o destrucción total del vehículo. En caso afirmativo, deberá indicarse de una parte, cuál fue la compañía de seguros que reconoció el siniestro y de otra, si aquella efectuó el pago del siniestro, determinando el monto reconocido; (iv) El dictamen deberá establecer si al vehículo se le ha cancelado o no la matrícula en el respectivo organismo de tránsito y (v) El dictamen deberá contener un avalúo de los daños sufridos por el vehículo.

6. RESPONSABILIDAD LLAMADAS EN GARANTÍA:

Por último, se estudiará si las llamadas en garantía deben concurrir al pago de la condena teniendo en cuenta las condiciones pactadas en los contratos de seguros.

El ente territorial condenado administrativa y patrimonialmente en esta instancia, formuló llamamiento en garantía en contra de AXA COLPATRIA SEGUROS S.A., y los coaseguradores ALLIANZ SEGUROS S.A y SEGUROS DEL ESTADO S.A. con fundamento en la póliza de responsabilidad civil extracontractual No **100164** vigente entre el día 15 de febrero y el 01 de julio de 2017, periodo en el cual se presentaron los hechos objeto del presente proceso.

De acuerdo con la póliza de responsabilidad civil extracontractual No **100164** los amparos contratados de acuerdo con las condiciones generales fueron los siguientes: i) R.C.E. General (Predios, labores y operaciones); ii) R.C. Contratistas y subcontratistas; iii) R.C. Vehículos propios y no propios; iv) Responsabilidad civil patronal; v) R.C. Productos y trabajos terminados; vi) R.C.E. Contaminación; vii) Gastos médicos; viii) R.C.E. parqueaderos; ix) R.C. cruzada; x) Bienes bajo cuidado tenencia y control y xi) Gastos de defensa.

Así mismo, se indicó en la póliza que la misma se renovaba con una vigencia del 15 de febrero al 30 de junio de 2017, frente al amparo de la responsabilidad civil extracontractual por perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales que sufra el asegurado por lesiones o muerte de personas y/o destrucción de bienes, lucro cesante, daño emergente, daño moral, fisiológico y la vida de relación, causados durante el giro normal de las actividades del asegurado, ello con un límite global de \$4.000.000.000 /14 Exp Elect. fls. 7 a 22/.

No obstante lo anterior, en la misma póliza se consagró frente a las exclusiones lo que pasa a verse:

EXCLUSIONES

AXA COLPATRIA QUEDRARÁ LIBERADA DE TODA RESPONSABILIDAD BAJO EL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO CUANDO SE PRESENTEN ALGUNO DE LOS SIGUIENTES HECHOS O CIRCUNSTANCIAS:

(...)

D. DAÑO MORAL QUE SE CAUSE A CUALQUIER TERCERO

(...)

S. PERJUICIOS A CAUSA DE LA INOBSERVANCIA O LA VIOLACIÓN DE UNA OBLIGACIÓN DETERMINADA IMPUESTA POR REGLAMENTOS O POR LA LEY.

/Resalta el Despacho/

Emerge como conclusión, que al haberse acreditado que la falla del servicio del Departamento de Caldas por omisión al deber legal de mantenimiento y señalización vial fue la causa que originó el perjuicio por el cual se condena, no existe deber de las COMPAÑÍAS DE SEGUROS frente al Departamento de Caldas y su responsabilidad administrativa y patrimonial. Aunado al hecho que el daño moral causado a un tercero también se encuentra dentro de las exclusiones de amparo.

D. COSTAS.

Según el artículo 365 del Código General del Proceso en armonía con el Acuerdo No.PSAA-16-10554 del 5 de agosto de 2016 se fija en un 3% del valor total determinado en concreto en esta sentencia a favor de los demandantes y a cargo de la demandada. Lo anterior debido a que los demandantes debieron acudir al servicio de un abogado quien actuó a lo largo del proceso.

En mérito de lo expuesto, EL JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MANIZALES, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. DECLARAR NO PROBADAS LAS EXCEPCIONES DE: “falta de legitimación en la causa por activa; Hecho exclusivo y determinante de un tercero; Inexistencia de falla en el servicio imputable al Departamento de Caldas; Inexistencia de nexo de causalidad e inexistencia de la obligación”, formuladas por el **DEPARTAMENTO DE CALDAS** y **NEGAR** la tacha a los testigos.

Al mismo tiempo declarar probada la excepción designada “**Ausencia de cobertura – limitación del riesgo asumido por el asegurador**”, planteada por las llamadas en garantía.

SEGUNDO. Declarar administrativa y patrimonialmente responsable al **DEPARTAMENTO DE CALDAS** del daño irrogado a los demandantes:

Primer grupo familiar: **MARÍA RUBIA CANDAMIL DE CANDAMIL; FERNANDO DE JESÚS CANDAMIL CANDAMIL; SILVIO DE JESÚS CANDAMIL CANDAMIL.**

Segundo grupo familiar: **PAULA YULIANA QUINTERO OSORIO; EMMANUEL QUINTERO OSORIO; GUILLERMO QUINTERO SALAZAR, GLORIA ELSY OSORIO JARAMILLO; MARCO ANTONIO QUINTERO OSORIO y JUAN DAVID QUINTERO OSORIO.**

Tercer grupo familiar: **NICANOR FRANCO FRANCO; ESTRELLA ORREGO DE FRANCO; RUBEN DARÍO FRANCO ORREGO y AMPARO FRANCO ORREGO.**

Cuarto grupo familiar: **JESÚS MARÍA GALLEGO LOAIZA; GILMA GALLEGO LOAIZA; VERÓNICA GALLEGO GALLEGO; JUAN CAMILO GALLEGO**

GALLEGO; CLAUDIA PATRICIA GALLEG0 GALLEG0; YAMID GALLEG0 GALLEG0; EGIDIO GALLEG0 GALLEG0; CARLOS ALBERTO GALLEG0 GALLEG0; NATALIA ANDREA GALLEG0 GALLEG0; DEISY LILIANA GALLEG0 GALLEG0; GLADYS GALLEG0 GALLEG0; NORBEY GALLEG0 GALLEG0; ALBANY GALLEG0 GALLEG0; SANDRA YANETH GALLEG0 GALLEG0; OTILIA LOAIZA ÁLVAREZ y JUAN JOSÉ GALLEG0 GIRALDO.

Quinto grupo: MARINO LONDOÑO.

TERCERO. En consecuencia, se **CONDENA** al **DEPARTAMENTO DE CALDAS**, a pagar por los siguientes perjuicios:

PERJUICIOS INMATERIALES - DAÑO MORAL Y DAÑO A LA SALUD:

- Primer grupo familiar:

Beneficiario	Parentesco	Salarios Mínimos Mensuales	Valor a 2024
MARÍA RUBIA CANDAMIL DE CANDAMIL	Madre	100	\$130.000.000
FERNANDO DE JESÚS CANDAMIL CANDAMIL	Hermano	50	\$65.0000.000
SILVIO DE JESÚS CANDAMIL CANDAMIL	Hermano	50	\$65.000.000
Total			\$260.000.000

- Segundo grupo familiar:

Beneficiario	Parentesco	Salarios Mínimos Mensuales	Valor a 2024
PAULA YULIANA QUINTERO OSORIO (víctima directa – daño moral)	Víctima directa	60	\$78.000.000
PAULA YULIANA QUINTERO OSORIO (víctima directa – daño a la salud)	Víctima directa	60	\$78.000.000
EMMANUEL QUINTERO OSORIO	Hijo	60	\$78.000.000
GUILLERMO QUINTERO SALAZAR	Padre	60	\$78.000.000
GLORIA ELSY OSORIO JARAMILLO	Madre	60	\$78.000.000
MARCO ANTONIO QUINTERO OSORIO	Hermano	30	\$39.000.000

JUAN DAVID QUINTERO OSORIO	Hermano	30	\$39.000.000
Total			\$468.000.000

- Tercer grupo familiar:

Beneficiario	Parentesco	Salarios Mínimos Mensuales	Valor a 2024
NICANOR FRANCO FRANCO	Abuelo - Padre	100	\$130.000.000
ESTRELLA ORREGO DE FRANCO	Abuela - Madre	100	\$130.000.000
RUBÉN DARÍO FRANCO ORREGO	Tío - Hermano	50	\$65.000.000
AMPARO FRANCO ORREGO	Tía - Hermana	50	\$65.000.000
Total			\$390.000.000

- Cuarto Grupo Familiar:

Beneficiario	Parentesco	Salarios Mínimos Mensuales	Valor a 2024
JESÚS MARÍA GALLEGO LOAIZA	Padre	100	\$130.000.000
GILMA GALLEGO LOAIZA	Madre	100	\$130.000.000
MASA SUCESORAL DE MÓNICA VIVIANA GALLEGO GALLEGO		100	\$130.000.000
VERÓNICA GALLEGO GALLEGO	Hermana	50	\$65.000.000
JUAN CAMILO GALLEGO GALLEGO	Hermano	50	\$65.000.000
CLAUDIA PATRICIA GALLEGO GALLEGO	Hermana	50	\$65.000.000
YAMID GALLEGO GALLEGO	Hermano	50	\$65.000.000
EGIDIO GALLEGO GALLEGO	Hermano	50	\$65.000.000
CARLOS ALBERTO GALLEGO GALLEGO	Hermano	50	\$65.000.000
NATALIA ANDREA GALLEGO GALLEGO	Hermana	50	\$65.000.000
DEISY LILIANA GALLEGO GALLEGO	Hermana	50	\$65.000.000
GLADYS GALLEGO GALLEGO	Hermana	50	\$65.000.000
NORBAY GALLEGO GALLEGO	Hermano	50	\$65.000.000
ALBANY GALLEGO GALLEGO	Hermana	50	\$65.000.000

SANDRA YANETH GALLEGO GALLEGO	Hermana	50	\$65.0000.000
OTILIA LOAIZA ÁLVAREZ	Abuela	50	\$65.0000.000
JUAN JOSÉ GALLEGO GIRALDO	Abuelo	50	\$65.0000.000
Total			\$1.270.000.000

PERJUICIOS MATERIALES:

Primer grupo familiar: A favor de la señora **MARÍA RUBIA CANDAMIL DE CANDAMIL**, se reconoce y ordena el pago del lucro cesante cesante – vencido y futuro – en cuantía total de **\$130.584.733**.

Quinto Grupo: De conformidad con lo previsto en el artículo 193 CPACA, se condena en abstracto el pago del perjuicio material en favor del señor **MARINO LONDOÑO**.

En tal sentido, mediante incidente se liquidará este perjuicio, para lo cual se tendrán en cuenta los siguientes parámetros: (i) Deberá elaborarse un dictamen pericial, que permita determinar si el vehículo de placas TAJ-917, sufrió o no pérdida o destrucción total; (ii) El dictamen deberá sujetarse a lo previsto en la Ley 769 de 2002 y la Resolución No 0004775 de 2009; (iii) El dictamen deberá establecer si el vehículo estaba amparado por póliza que cubriera el siniestro por pérdida o destrucción total del vehículo. En caso afirmativo, deberá indicarse de una parte, cuál fue la compañía de seguros que reconoció el siniestro y de otra, si aquella efectuó el pago del siniestro, determinando el monto reconocido; (iv) El dictamen deberá establecer si al vehículo se le ha cancelado o no la matrícula en el respectivo organismo de tránsito y (v) El dictamen deberá contener un avalúo de los daños sufridos por el vehículo.

CUARTO. El **DEPARTAMENTO DE CALDAS** cumplirá la sentencia en la forma y términos de los artículos 187, 192 y 195 del C.P.A.C.A.

QUINTO: EJECUTORIADA la presente providencia, por la **SECRETARÍA** se dará **CUMPLIMIENTO** a lo previsto en el inciso final de los artículos 192 y 203 del C.P.A.C.A.

SEXTO: EXPEDIR por Secretaría y a costa de la parte interesada, las copias auténticas que de esta providencia se requieran, conforme a los lineamientos establecidos en el artículo 114 del C.G.P.

SÉPTIMO: SE CONDENA EN COSTAS a la entidad demandada a favor de los demandantes, en el valor fijado en la parte motiva.

OCTAVO: EJECUTORIADA esta providencia, **LIQUÍDENSE** los gastos del proceso, **DEVUÉLVANSE** los remanentes si los hubiere y **ARCHÍVENSE** las diligencias, previas las anotaciones pertinentes en el programa informático SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

**PATRICIA VARELA CIFUENTES
JUEZ**

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en <https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx> “